CRUZADOS SALMANTINOS *

Contribución al estudio del discurso legitimador del Movimiento Nacional. Salamanca 1936-1940

Por el carácter primordialmente interno o civil de la Guerra de 1936-39, bien puede decirse, acudiendo a la tópica frase, que fue una continuación de la política por muy otros medios. Para Julio Aróstegui el conflicto fue de grupos y clases, tuvo una dimensión básicamente social, si bien en tal variable esencial se incardinaron (condicionándola) otros muchos diferendos históricos secundarios¹.

Además, la internacionalización a que dio lugar el apoyo germano-italiano a Franco, insertó la conflagración española en el contexto de otra europea ya en eclosión tras la remilitarización de Renania², debido a lo cual la inmensa mayoría de los combatientes y de la opinión pro-republicana mundial, consideraron siempre a la Guerra Civil española como uno de los momentos iniciales de la Guerra Mundial³.

Por todo ello, una verdadera guerra de tinta y de ondas acompañó al desenvolvimiento de nuestra contienda desde sus inicios, y aún le sobrevivió, pues la lucha fratricida tuvo una larga y cambiante perduración en el régimen franquista que (invirtiendo el concepto/tópico de Clausewitz) continuó durante años la guerra por muy otros medios.

Lo que aquí nos proponemos es el estudio de un aspecto muy concreto de la polémica ideológica que generó la contienda, a saber: la tarea empen-

* Agradezco a Antonio Fuentes Labrador la ayuda prestada para la confección de este artículo que es, en realidad, parte de un trabajo más amplio que publicaremos próximamente, acerca de los precedentes de Legitimación del Alzamiento.

1 Cfr. J. Aróstegui, *Los componentes sociales y políticos*, dentro de la obra colectiva *La Guerra Civil Española 50 años después*, Edit. Labor, Barcelona 1985, pp. 113 y 93.

2 Cfr. R. Arón, *Mémoires. 50 ans de réflexion politique*, Edit. Julliard, París 1983, pp. 135 y ss.

3 La visión más caracterizadamente discordante con este panorama es la que sostuvo el Partido Conservador inglés, singularmente Churchill, quien en sus Memorias considera el período de nuestra Guerra Civil como un mero «intervalo dramático» entre 1918 y 1939. Otros, como Chamberlain, vieron siempre los peligros de división internacional que una Guerra como la de España podía causar y por eso siempre exhortaron a mantener la sangre fría, preconizando una política de pasividad que no se tradujo en la práctica sino en la fortificación del Eje agresivo Roma-Berlín.

Cfr. W. S. Churchill, *Memorias. La Segunda Guerra Mundial. De Guerra a Guerra*, Edit. Orbis, Barcelona 1985, pp. 175 y ss.

dida en Salamanca para legitimar la sublevación de julio del 36, la guerra y su forma de conducción, así como el incipiente sistema de poder encarnado por Franco de manera ya irreversible con el Decreto de Unificación⁴.

La importancia de un trabajo como el que aquí abordamos, reside en el hecho de que el conocimiento de los mensajes ideológicos orientados a la legitimación de un poder, permite descubrir las raíces más celosamente guardadas del mismo: su verdadero origen y naturaleza.

1. LA SUBLEVACIÓN

1.1. Aspectos generales

La primera y más importante cuestión tratada por los defensores del Alzamiento del 17 de julio es la de la justificación del mismo.

Y es que es bien sabido que el poder político es un conjunto de instituciones, técnicas y realidades simbólicas, instaurado en un grupo social para dotar a sus miembros de estabilidad y seguridad en su vida colectiva, permitiéndoles conjurar pacíficamente los peligros de la convivencia entre sí y con otros grupos similares. Para lograr este objetivo, el poder se ejerce coactivamente, haciéndose obedecer por el *miedo* hacia él de los subordinados, evitando así la subversión del orden instaurado, frente a cuya mera posibilidad (siempre latente) el poder siente también *miedo*. De aquí que el poder sea de naturaleza bifronte, como Jano: coactivo y opresor, en cuanto se impone empleando la fuerza, es también protector y benéfico, al cuidar los intereses generales y promocionarlos, siempre con la vista puesta en lograr un acatamiento más fácil, menos necesitado de coacción⁵.

Cuando el poder deja de ser pura dominación coactiva y acaba siendo aceptado al margen del *miedo* que inspira su fuerza, conjura también su propio *miedo* a los subordinados y se legitima: delimita quién posee el mando, ritualiza el conflicto de intereses mediante el Derecho, fija reglas para alcanzar o dejar el poder, etc. La legitimación de un sistema político es, pues, un pacto que sólo es posible cuando su contenido se acata por la práctica totalidad de los ciudadanos y se explicita en una legalidad normativizadora de las relaciones gobernantes/gobernados, y de estos últimos entre sí, lo cual exige el asentamiento de aquel pacto originario en un orden axiológico, de mentalidad y de intereses, acorde con las tendencias dominantes de la época.

⁴ Cfr. J. P. Fusi, *Franco. Autoritarismo y poder personal*, Ediciones El País, Madrid 1985, p. 58.

⁵ Cfr. M. Duverger, *Introducción a la política*, Edit. Ariel, Barcelona 1983.

J. Freund, *La esencia de lo político*, Edit. Nacional, Madrid 1968.

G. Roheim, *Origine e funzione della cultura*, Ed. Feltrinelli, Milano 1972.

Si ese pacto se rompe (y con él la legalidad establecida), se produce una anomalía de la que dimanará de nuevo, incontenible, el *miedo*. Y los primeros en sentirlo y difundirlo son precisamente quienes ejercen la presión rupturista contra la legalidad. Son muy significativos a este respecto los testimonios de los principales jefes del levantamiento, referentes a la voluntad de imponerse desde los primeros momentos con medios de gran violencia, orientados sí a establecer un terror paralizante en el adversario, pero que también podemos considerar como expresión culminante de lo que Elías Canetti la *angustia o miedo del mando*⁶.

Con la ruptura de la legalidad tras la sublevación de julio, España regresaría bruscamente al hobbesiano *estado de naturaleza*, al enfrentamiento de todos contra todos, instalándose así en la guerra, actividad que el general Mola consideraba (aunque eso sí, refiriéndose a contiendas entre naciones) como un «*sistema de derecho natural*» al que recurrir cuando se quiere alcanzar el engrandecimiento patrio, para lo cual es preciso que la sociedad esté imbuida de la cultura o moral del *militarismo* y dispuesta a hacer tabla rasa de los declinantes valores del parlamentarismo y la democracia. Con mucha anterioridad al conflicto, el Director preveía ya la necesidad de fundar un nuevo orden político diferente del democrático, es decir, no asentado en pactos reguladores de la vida social, sino establecido sobre los valores de jerarquía y sumisión, propios de la institución castrense⁷.

Renegando de toda idea de pacto, difundiendo con una represión draconiana del adversario el propio *miedo* a las consecuencias del paso dado, los sublevados renuncian a toda autojustificación ideológica tendente a presentarse como organizadores de un nuevo consenso libremente pactado entre todos. «No —dirá Pemán en los primeros días del Alzamiento—; la guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre por la idea de *exterminio* y *expulsión*»⁸. Y el mismísimo Mola remacharía después estos conceptos con todo el peso de su autoridad, al señalar que la guerra sólo podía acabar «por el dominio de uno de los dos bandos y por el *exterminio absoluto y total del vencido*»⁹. Queipo de Llano, a su vez, con el peculiar tono que caracterizaba sus discursos en la Radio, prometía a los diez días de la sublevación africana,

6 Cfr. E. Canetti, *Masa y poder*, 2 vols., Alianza Editorial, Madrid 1983.

7 Cfr. E. Mola, *Obras Completas*, Librería Santarén, Valladolid 1940, pp. 945 y ss.

Como es bien conocido, idéntico sentimiento antiparlamentario tenía también Franco. En unas declaraciones a un corresponsal inglés en 1937, llega a manifestarle que el parlamentarismo no es sólo impracticable en España sino incluso en la propia Inglaterra, donde de durar mucho, llegaría a ocasionar el desmoronamiento del Imperio.

8 J. Pemán, *Arengas y crónicas de guerra*, Cerón Editores, Cádiz 1937, p. 13.

9 Cfr. J. M. Iribarren, *Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de la Guerra*, Edit. Heraldo de Aragón, Zaragoza 1937, p. 292.

perseguir a los rojos «como fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos»¹⁰. Evidentemente, a nuestro juicio, poca seguridad y confianza se tenía en la bondad de los propios planteamientos, cuando para sostenerlos se pensaba en un sistema de poder estructurado y jerarquizado militarmente, en el que el miedo de los ciudadanos/súbditos fuera tan radical que les apartase de cualquier veleidad de subversión de lo instituido.

1.2. *El Derecho al Alzamiento*

De lo anteriormente expuesto se deduce que la primera y básica tarea asignada a los fabricantes de ideología, fue la de justificar la bondad y necesidad del levantamiento de julio, en la línea marcada por el mismo Franco en su alocución radiada desde Tetuán y que recogía el *ABC* de Sevilla: frente al desorden y caos imperante, frente a la vulneración de la Constitución y de las leyes, frente a la conversión del gobierno en mera apariencia y frente a la amenaza a la unidad de la patria, el alzamiento militar pretendía garantizar el orden general y la independencia de España¹¹.

A esta cuestión dedicó el Magistral de la Catedral de Salamanca, Aniceto de Castro Albarrán, varios escritos, singularmente el libro *El Derecho al Alzamiento*, que es en realidad, según confesión del autor, prácticamente el mismo texto aparecido en 1934 bajo el título *Derecho a la Rebelión*, si bien ampliado para recoger las nuevas y trascendentes realidades: por una parte, el propio movimiento armado de julio, prueba inapelable de verificación de la justeza de su teoría de la legitimidad de rebelión contra la República; por otra, los avales de la Jerarquía Eclesiástica a sus planteamientos¹², incomprensidos o puestos en sordina en 1934 por el oficial *tacticismo* de la Iglesia y gran parte de la Derecha, frente a una República que se creía poder recuperar aún, después de las elecciones de 1933.

10 Cfr. M. Barrios, *El último virrey. Queipo de Llano*, Edit. Argos Vergara, Barcelona 1978, p. 204.

11 Cfr. *ABC* de Sevilla, jueves, 23 de julio de 1936, p. 1.

12 El aval más importante lo constituyen las amables palabras del Cardenal Isidro Gomá con las que, a modo de Pórtico, se inicia otro libro de Castro Albarrán (*Guerra Santa. El sentido católico del Movimiento Nacional Español*, Gráf. del Noticiero, Burgos-Zaragoza 1938) y que suponen, a través de los elogios al autor del *Derecho al Alzamiento*, y refiriéndose a este último libro, la identificación con lo escrito por el Magistral de Salamanca. Incluso Gomá pretende, a fuerza de gentilezas, hacer olvidar a Castro Albarrán el amargor que el prudente silencio episcopal le produjo en ocasión de la aparición de libro en plena República.

Respecto a la rebelión militar del 36 como prueba revalidadora del Derecho precognizado por Castro Albarrán, dice Gomá: «Libro de una tesis que, sin disquisiciones perdidas de derecho público o de ética social, el buen pueblo español, con un puñado de bravos militares, se ha encargado de demostrar con el argumento inapelable de las armas». (Cit. por Castro Albarrán en el 'Prólogo en la Paz' al *Derecho al Alzamiento*, Salamanca 1937.)

El texto de Castro Albarrán es fundamentalmente teórico o *doctrinal* y obvia hacer un discurso *político*, es decir, se centra voluntariamente en las enseñanzas de los grandes doctores cristianos ante la cuestión del poder, en los términos más generales. Las referencias históricas concretas, salvo en el brevísimo *Epílogo*, son las alusivas al ciclo abierto por las revoluciones liberales, en que la secularización de la vida social y política obligó a los Pontífices a adaptar la doctrina tradicional a las nuevas exigencias de los tiempos.

Libro que pretende moverse en el abstracto mundo de los principios teoréticos, acabó creando escuela. Así, por ejemplo, lo muestra la Primera Parte de otro conocido opúsculo del jesuita P. Juan de la Cruz Martínez, casi mera repetición de Castro Albarrán, a quien cita profusamente¹³.

Conviene decir cuanto antes, que estos dos libros y el resto de escritos que son objeto de nuestro estudio, no exceden en cuanto a su altura intelectual, del mérito de una ordenada repetición de los clásicos manuales de Filosofía y Teología Moral que por aquella época se estudiaban en los seminarios y eran el bagaje cultural del común del clero. El mismo *tono* inconfundiblemente *escolástico* de la forma del discurso deductivista empleado, denota claramente las fuentes escolares en que se bebe. Respecto a otros canales de información contemporánea, destacan fundamentalmente los diarios de Derecha, como *ABC* y *El Debate* principalmente, revistas como *Acción Española* o *Revista Eclesiástica* y autores como Gil Robles —padre—, Vázquez de Mella, Vegas Latapié, Marcial Solana, Hilario Yaben o Angel Herrera.

Por otra parte, la búsqueda de una finalidad propagandística, condiciona el tono empleado. Castro Albarrán se fija la misión de «vulgarizador de nuestros doctores inmortales»¹⁴, mientras el dominico P. Ignacio Menéndez Reigada pretende dirigirse a los católicos en general, para contribuir con su

«granito de arena a la recristianización de la nueva España, y para dar alguna luz a quienes no han visto todavía despuntar el alba y dudan de la licitud y carácter de nuestro movimientos»¹⁵.

En lo tocante al contenido, la doctrina expuesta por nuestros autores es la del origen divino del poder, en virtud de lo cual los católicos deben mantener su *neutralidad* frente a la Autoridad constituida, mediante un respetuoso *acatamiento* que coadyuve a garantizar la paz y el orden social general, favoreciendo la orientación de la Autoridad a la prosecución del

13 J. de la C. Martínez, *¿Cruzada o Rebelión? Estudio histórico-jurídico de la actual Guerra de España*, Librería General, Zaragoza 1938.

14 A. de Castro Albarrán, *El Derecho al Alzamiento*, op. cit., p. 22.

15 I. Menéndez Reigada, 'La Guerra Nacional Española ante la Moral y el Derecho', en la *Revista La Ciencia Tomista*, publicación bimestral de los dominicos españoles, nn. 163-164, enero-abril, Salamanca 1937, p. 42.

Bien Común, piedra de toque de la legitimidad de cualquier sistema¹⁶ y que necesariamente incluye el reconocimiento de todos aquellos aspectos (aún los estrictamente temporales), necesarios para la realización de la misión de la Iglesia.

Estos principios generales deben iluminar, como siempre en la Moral, las situaciones históricas concretas, los casos particulares. Para Balmes, Taille o el Cardenal Mercier (quien hablaba refiriéndose nada menos que a la ocupación de Bélgica por los alemanes en la Gran Guerra), el acatamiento al poder establecido es un principio susceptible de matices y gradaciones en la práctica. En efecto, ni los Papas Pío VII, Gregorio XVI, Pío IX y Pío X reconocieron jamás la legitimidad de los poderes surgidos de la *rebelión de las turbas demagógicas* —léase de las revoluciones liberales¹⁷—, ni León XIII o Benedicto XV aceptaron el «ralliement» de los católicos franceses o portugueses a sus respectivas repúblicas, más que como resultado de la imperiosa demanda de las necesidades del Bien Común (léase por el ineludible pragmatismo aconsejado por la observación de la estabilidad alcanzada en 1892 por la III República francesa y en 1919 por la República portuguesa, que hacía puramente utópico el sueño de involución a situaciones anteriores).

Así pues, en tal doctrina no se integra el principio de autonomía de lo secular ni se acepta que el Bien Común tenga un soporte democrático, formado por esa coparticipación de intereses, valores y simbologías que Ferrero llama «la orientación general de los espíritus»¹⁸.

El gran equívoco introducido en su discurso por Castro Albarrán, es el de utilizar fuera de su ambiente histórico las diversas Encíclicas o Cartas Papales referidas a situaciones de enfrentamiento del Estado Pontificio contra Napoleón I y el Reino de Italia Unida, o simplemente destinadas a la reafirmación de derechos y bienes tradicionales de la Iglesia, negados o re-

16 Castro Albarrán extrae del Magisterio de las Encíclicas y Cartas Pontificias, una noción de «Bien Común que será unas veces, concretamente, el *orden público*, la paz con la *tranquilidad en el orden*; será, otras, la *religión* y, mediante ella, la salud de la sociedad, la felicidad de los pueblos» (*El Derecho al Alzamiento*, op. cit., p. 235).

17 Recoge el Magistral salmantino una serie de textos pontificios que resultan significativos de sus apoyaturas doctrinales y que por eso reproducimos: «En verdad con tales doctrinas han llegado las cosas a un punto que se tiene por muchos como legítimo el derecho a la rebelión revolucionaria, pues ya prevalece la opinión de que, no siendo los gobernantes sino delegados que ejecutan la voluntad del pueblo, es necesario que todo se mude al compás de la voluntad de éste, no viéndose nunca el Estado libre del temor de disturbios y asonadas.»

«Y asimismo, armada la multitud con la creencia de su propia soberanía, se precipita fácilmente a promover turbulencias y sediciones.»

«Por tanto, quebrantar la obediencia y acudir a la sedición, sublevando la fuerza armada de las muchedumbres, es crimen de lesa majestad.»

Cfr. *El Derecho al Alzamiento*, op. cit., pp. 225 y 226.

18 Cfr. G. Ferrero, *Potere*, SugarCo, Milano 1981, p. 36.

cortados por el Estado Liberal. De aquella circunstancia histórica en que la Iglesia se identificaba con el Trono, surge una idea de legitimidad política en la que se incluye el papel de lo religioso (moral e institucional) como fundamento del poder. Pero incluso si la Iglesia mantuvo en el siglo XX parte de tales concepciones, resulta obvio que la literalidad del mensaje doctrinal enjuiciador de procesos históricos superados en Europa, no podía utilizarse integralmente sin más (tal como hacen Castro Albarrán y los demás legitimadores salmantinos), en el enjuiciamiento de los problemas españoles de los años treinta.

De la concepción del Bien Común expuesta, surge inseparable la idea de Autoridad legitimada por la Tradición, en la que todo «ralliement» de los católicos a un Estado de tipo liberal-demócrata no es sino tan coyuntural como accidentales son las formas de gobierno, siendo cada caso particular el que debe merecer el juicio de la Jerarquía.

Y la doctrina de Pío XI en su Carta Pastoral a Méjico, plenamente aplicable a la España republicana, como se encargó de resaltar el Episcopado Español (Gomá, Pla, Arce Achotorena, Eijo y Garay o la misma Carta Pastoral Colectiva), reconoce el derecho a una resistencia de los súbditos, bien a las leyes injustas, bien al conjunto del sistema, que puede ir desde una actitud meramente pasiva, a la violencia armada¹⁹.

En su otra obra, escrita en los primeros diez meses de la Guerra y publicada en 1938²⁰, Castro Albarrán resume con mayor brevedad y esquematismo sus tesis del «Derecho al Alzamiento», en lo que se refiere al esta-

19 Un caso de *injusticia en las Leyes* habría sido el de la Constitución de 1931 y la Ley de Congregaciones, impregnadas de laicismo y, por ende, contrarias al Bien Común, tal como manifestó en su momento la Iglesia al rechazarlas. Pío XI afirmaría respecto a la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas:

«Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de nuestro apostólico ministerio reprobirla y condenarla. Por consiguiente, Nos protestamos solemnemente y con todas nuestras fuerzas contra la misma ley, declarando que ésta nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia» (Encíclica *Dilectissima Nobis*, de 3 de junio de 1933).

Por su parte, los obispos españoles rechazaron también la citada ley como injusta, señalando «su mucho pesar por la presentación, voto y aprobación..., declarando que nunca podrá ser alegada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia... [Esta] Reprueba, condena y rechaza todas las sugerencias y restricciones con que esta ley de agresiva excepción pone a la Iglesia bajo el dominio del poder Civil; reclama la invalidez y carencia de valor legal de todo lo estatuido en oposición a los derechos integrales de la Iglesia» (*Declaración Colectiva* de los Obispos españoles, de 25 de mayo de 1933).

Ya en plena Guerra, la Carta Colectiva hablaría de la legislación laica de la República, como un intento «contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional»; «la Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu, fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional» (cfr. *Heraldo de Aragón*, 6 de agosto de 1937, p. 3).

20 Cfr. A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., pp. 80-85 y ss., 92 y ss.

blecimiento de los conceptos y tipos de ilegalidad/ilegitimidad, usurpación y tiranía, así como a las respectivas formas de resistencia a que tienen derecho los súbditos según Santo Tomás, Saavedra Fajardo, Suárez, Mariana, Meyer o Gil Robles —padre—.

El juez inapelable que dictamina el grado de injusticia o tiranía de un régimen y la forma de resistencia a él, es el *Pueblo*, quien reconoce *tácitamente* la situación y la explicita mediante el *común sentir de los más y mejores*, pues la soberanía del juez supremo que es el pueblo sólo reside transitoriamente en él, en un momento que nuestro autor no concreta. Implícitamente, pues, dado el pensamiento general de Castro Albarrán, si los católicos son los más y el Clero son los mejores, no es sino la Iglesia la institución que vicariamente sustituye al Pueblo en la trascendental toma de decisión de éste²¹.

Pero la cuestión fundamental es la que plantea el P. Juan de la Cruz Martínez en *Razón y Fe*: el levantamiento militar y el aplauso y adhesión que despertó era

«¿desbordamiento de pasión o fulgor de razón?, ¿Cruzada o Rebelión?... El Ejército Nacional —y con él la España sana— ¿se alzó en armas contra el poder legítimo, o más bien contra un injusto usurpador?»²².

Para Castro Albarrán, el movimiento iniciado el 17 de julio no habría dado lugar en sentido estricto a una *rebelión* (levantamiento injusto contra un poder legítimo), sino que fue expresión de una legítima *rebeldía* (alzamiento contra un poder usurpador, ilegítimo y tirano)²³. Tal rebeldía, dadas las características del sistema de poder al que se enfrentaba²⁴, podía utilizar

21 También el Bando de Guerra proclamado en la VII División por el General Saliquet, afirmaba actuar con respaldo de los mejores, con «la adhesión de todas las personas patrióticas, amantes del orden y de la paz, que suspiraban por este movimiento... ya que siendo sin duda estas personas la mayoría...». Cfr. *El Norte de Castilla*, 19 de julio de 1936, p. 1.

22 J. de la Cruz Martínez, '¿Se lucha en España contra un poder legítimo?', en *Razón y Fe*, n. 476, Burgos 1937.

23 Cfr. A. de Castro Albarrán, *El Derecho...*, op. cit., pp. 344-345.

24 Una «ojeada rápida sobre la catadura de la segunda República» la ofrece el dominico Fr. Luis Getino: «Incendiaría al mes de establecerse; tiránica, al cambiar a capricho las autoridades municipales legítimamente constituidas; impía y anticristiana en su legislación; violenta y hasta impúdica en amañar las elecciones de febrero de 1936, apuntándose mayoría de diputados con muchos menos votos; y, por fin, abriendo con las elecciones una época de terror y de exterminio, de incendios, de robos y de asesinatos, que culminaron con el de Calvo Sotelo, y se advertirá que la tiranía económica, civil y religiosa era enteramente insoportable, y estaba pidiendo una respuesta, que sólo con las armas podría darse... había que salir de aquella tiránica opresión, tiránica en su origen y en su ejercicio... por los mismos que detentaban el poder y, en lugar de consagrarse a labrar nuestra felicidad, se dedicaban a excitar nuestros odios». Cfr. L. Getino, 'El derecho de gentes a través de la guerra española', en *La Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos españoles*, año 29, n. 75, tomo 57, fasc. 6, Salamanca, 1938, pp. 497-498.

la fuerza, asumiendo racionalmente los riesgos del fracaso y los estragos que su empleo pudiera causar.

Tal fuerza o violencia, preconizada contra la República por J.O.N.S., F.E. y grupos de Juventudes Monárquicas, se diferenciaría, según Castro Albarrán, de la que defendía el socialismo revolucionario o el nacionalismo violento tipo «Action Française», en que sería el natural brote «de un espíritu recio que aún no había muerto, clarines y tambores de los que en España no se contentaban con llorar como mujeres lo que no habían sabido defender como hombres» o, en palabras tomadas de Eugenio Montes por nuestro canónigo, la justa respuesta a la provocación: «a puñalada trasera, la navaja en la boca; el vejamen; el zarpazo»²⁵.

La licitud de lo que la Pastoral Colectiva denominó *plebiscito armado* contra la República, se fundamentaría en la seguridad de haberse realizado con toda justicia:

«El levantamiento armado contra el Frente Popular es, pues, justo y lícito, por tratarse de un gobierno usurpador y tiránico en sumo grado. Y este levantamiento reúne todas las condiciones que exigen los teólogos, pues no quedaba otro recurso humano y no se podía dilatar su ejecución por el peligro inmenso que había en la tardanza»²⁶.

Menéndez Reigada basaría tales asertos (lo mismo que Castro Albarrán) en la doctrina tradicional de la Iglesia y su Magisterio, sintetizándola en una serie de *proposiciones* precisas y «argumentos escuetos al estilo de las escuelas», en que establecía:

I. *La Ilegitimidad de origen del Frente Popular*, sobre la base de la injusticia que suponía «no haber querido entregar el poder a los partidos católicos que actuaban dentro de la ley, y a quienes pertenecía según derecho reconocido en régimen parlamentario, por ser el grupo más numeroso de la Cámara» elegida en 1933; además, el carácter amañado desde el gobierno que habrían tenido las elecciones de febrero del 36, en que «se corrompió descaradamente el sufragio»; el fraude en el recuento y distribución de Actas y la injusticia del traspaso anticipado de poderes, hechos todos que habrían configurado al gobierno del Frente Popular como «ilegítimo en su origen inmediato y usurpador injusto del poder»²⁷.

Tales afirmaciones eran coincidentes casi al pie de la letra con los argumentos aportados por la CEDA durante el desarrollo de los acontecimientos. Así, en la nota explicativa de la crisis de diciembre de 1935, faci-

25 A. de Castro Albarrán, *ibid.*, pp. 293 y 296.

26 I. Menéndez Reigada, *La Guerra Nacional Española...*, op. cit., pp. 46-47.

27 *Ibid.*, p. 43.

litada a la prensa por la formación derechista, se llegaba a hablar de la constitución del Gobierno Portela como de una amenaza revolucionaria para impedir la reforma de la Constitución, provocando la ruptura del bloque centro-derechista y obligando a unas elecciones anticipadas en que la CEDA necesariamente aparecería ante las derechas como fracasada en su estrategia, ocasionándose con ello —como se diría después— la división y la derrota²⁸. *El Debate* se referiría al Gabinete Portela como gobierno surgido de planteamientos extraparlamentarios, es decir, contrarios a la misma naturaleza del sistema constitucional²⁹, llegando a calificar de *triangular* la neutralidad electoral de un ejecutivo dirigido por un masón y contrarias al espíritu constitucional e *ilegales* las prórrogas de la suspensión de sesiones de Cortes, por no hablar de las coacciones caciquiles de todo tipo destinadas a fabricar una inexistente mayoría para el fantasmal Centro³⁰.

Las lamentaciones quejumbrosas de *El Debate* y el *ABC* se extenderían tanto a la campaña como al recuento de votos, denunciando ambas operaciones como *ultraje* al país y nueva *mancha* pringosa en el «debe» del régimen republicano³¹. Para el diario de don Angel Herrera, el recuento y discusión de Actas por la Comisión correspondiente del Congreso de Diputados, significaba que la izquierda frentepopulista rompía toda posibilidad de *pacto*:

«La representación de una parte de España niega a la otra, *mayor y mejor*, los beneficios de la ley común y hasta la expulsa del ámbito de la Ciudad... la mayoría parlamentaria adopta una actitud de monopolio, de exclusivismo, de tiranía»³².

A reforzar estas consideraciones tan extremadamente peligrosas, coadyuvó en no poca medida el radicalismo de planteamientos de un sector del partido más fuerte de la clase obrera, el PSOE, cuya ala caballerista y sus *capellanes*, a través sobre todo de *Claridad*, formulaban una línea política que la Derecha interpretaba como una amenaza directa y absoluta contra sus intereses vitales, aunque en realidad la izquierda socialistas —es ya suficiente-

28 Cfr. J. R. Montero, *La CEDA. El Catolicismo social y político en la II República*, Edics. de *La Revista de Trabajo*, Madrid 1977.

Gil Robles en sus Memorias califica la solución de la crisis de finales de 1936 tomada por don Niceto, como *peligrosa e injusta*, habiendo llegado a manifestar al Presidente que su decisión empujaba a la Derecha *fuera de la legalidad*. Muy significativamente, el relato de la salida de la crisis ministerial se encabalga con los intentos del subsecretario del Ministerio de la Guerra, general Fanjul, de propiciar un golpe militar. Cfr. J. M. Gil Robles, *No fue posible la paz*, Editorial Planeta, Barcelona 1978, pp. 355 y ss.

29 Cfr. *El Debate*, 14 de diciembre de 1935.

30 Cfr. *El Debate*, 10 de diciembre de 1935. Vid. también *ABC* de 22 de enero de 1936.

31 Cfr. *ABC* de 25 de enero y 12, 17, 18, 20 y 21 de febrero de 1936. *El Debate* de 18 de febrero y 17 de marzo de 1936.

32 Cfr. *El Debate*, 31 de marzo de 1936.

mente conocido³³— renunciaba a organizarse en serio para una eventual toma del poder como aquella con la que se amenazaba, atrincherándose para ello en una práctica político-sindical de corte reformista e, incluso, bloqueando eficazmente otras opciones políticas de izquierda.

Desde el final del invierno, la derecha monárquica y católica entra en el más radical de los retraimientos y abraza decididamente la vía de la gran conspiración (una vez fracasado el intento de impedir con un golpe de mano palaciego el traspaso de poderes al Frente Popular), ante el convencimiento de que

«el Partido Socialista se lanza ya decididamente por el camino de la insurrección, de la violencia y de la guerra civil... La República no es más que una etapa, como tantas veces se ha dicho, en el camino hacia la implantación del Estado Socialista... Y esto lo quieren afirmar, con la mayor rotundidad posible los que siguen a Largo Caballero... El proyecto alcanza también a la nacionalidad española. Se trata de implantar la confederación de las nacionalidades ibéricas. Y lo grave de estos propósitos es que se mantienen cuando una situación política favorable les ofrece la coyuntura de una participación gubernamental»³⁴.

Esta percepción de la situación por *El Debate*, ampliamente compartida por *ABC*, recoge subliminalmente otros dos de los grandes temas justificadores del Alzamiento: el desbordamiento del gobierno de Frente Popular por sus bases de izquierda y la preparación de una insurrección destinada a implantar un régimen de tipo soviético.

Como no podía ser menos, Menéndez Reigada desarrolla estos temas capitales en otra de sus *proposiciones*.

II. *Ilegitimidad de ejercicio y tiranía en el régimen*, basada en el presunto constante atentado desde el Gobierno contra instituciones como la patria, la nación o la familia; liberando los criminales presos en las cárceles e, incluso, encumbrándolos a cargos públicos; desposeyendo de todos sus derechos legítimos a los ciudadanos pacíficos y fomentando locos separatismos y todo género de crímenes³⁵.

Sobre tales extremos es bien conocida la postura de Gil Robles y Calvo Sotelo en el Congreso, particularmente en los debates sobre el Orden Público, culpando al Gobierno (por omisión e instigación al mismo tiempo) de un estado de anarquía en el que el ataque a la religión y sus símbolos ocupaba un lugar muy destacado; esta estrategia de acoso parlamentario al Gobierno, que incluía muy detalladas listas de sucesos en que quedaban englobados de-

33 Cfr. S. Juliá, *La Izquierda del PSOE (1935-1936)*, Edit. Siglo XXI, Madrid 1977.

34 Cfr. *El Debate*, 18 de marzo de 1936, p. 1.

35 Cfr. I. Menéndez Reigada, *La Guerra Nacional Española...*, op. cit., p. 44.

litos y crímenes de la más diversa especie e intencionalidad, con hechos sociales muy expresivos de la coyuntura social y política del momento, estaba dirigida y diseñada por Calvo Sotelo, cabeza civil de la conspiración en marcha, de cuyo asesinato el propio Gil Robles exculpó al Gobierno en la famosa, tensísima y última sesión de la Diputación Permanente de las Cortes antes de la Guerra ³⁶.

Los planteamientos de Gil Robles y Calvo Sotelo, repetidos con amplio eco difusor por los medios de prensa de derecha, son quizá una de las más claras expresiones del *miedo* —real, sin duda— sentido por los sectores conservadores ante su propia división interna, que ni siquiera era capaz de soldarse ante la dura realidad del desplazamiento del poder. Este *miedo* se reforzaba ante la evolución del Frente Popular, desprovisto también de unidad interna y cuyo gobierno, tras la elección de Azaña como Presidente de la República, era incapaz de ampliar su base social a consecuencia de la ofensiva sindical UGT-CNT, que impedía los esfuerzos moderadores de los núcleos no caballeristas del PSOE y la acción templada del PCE ³⁷. El miedo a las reformas anunciadas desde el Gobierno, haría el resto.

La derecha, pues, consciente de su división, pero no menos consciente de la paralizante *fragmentación* del adversario, decide probar vías diferentes de las parlamentarias.

Parte de la cobertura ideológica justificativa de esas nuevas vías son las campañas sobre el Orden Público, mixtificadoramente planteadas tanto desde el punto de vista de las causas como del de las responsabilidades. Cifras y manipulaciones aparte, lo realmente cierto era que se vivía una estrategia de la tensión —multidireccional y multicausal— en el seno de un ambiente socio-político muy fracturado a ambos lados del espectro ³⁸. La reducción del

36 Cfr. J. M. Gil Robles, *No fue posible la paz*, op. cit., p. 745. Sobre esta cuestión es unánime el parecer de autores tan diversos como Payne, Jackson, Seco Serrano, Gibson, Tuñón de Lara y Preston.

37 Acerca de las contradicciones en el seno de la izquierda española y la debilidad de los sectores burgueses dentro de ella, en el contexto de la primavera trágica, resultan particularmente sugestivos los análisis de S. Juliá, *La Izquierda del PSOE (1935-1936)*, op. cit.; 'El fracaso de la República', en el extraordinario I de la *Revista de Occidente*, dedicado a la II República en su 50 aniversario, nn. 7-8, noviembre 1981, pp. 196 a 211; 'Manuel Azaña: la razón, la palabra y el poder', en la obra colectiva *Azaña*, editada por Vicente Alberto Serrano y José María San Luciano, Ed. Edascal, Madrid 1980, pp. 299 a 310; 'Organizaciones y prácticas obreras', en *Arbor*, tomo CIX, nn. 426-427, junio-julio 1981, pp. 139-149.

38 Sobre la cuestión de la división interna de la Derecha resulta de particular interés la consulta de las Memorias de Gil Robles ya citadas o las de J. Chapapieta, *La Paz fue posible*, Ed. Ariel, Barcelona 1972, capítulos IX y X; asimismo sigue resultando imprescindible el trabajo de S. Galindo Herrero, *Los partidos monárquicos bajo la II República*, Ed. Rialp, Madrid 1965; también A. Lizarra Iribarren, *Memorias de la conspiración 1931-1936*, Ed. Gómez, Pamplona 1954; finalmente, S. G. Payne, *Falange. A History of spanish fascism*, Oxford University Press, 1962.

problema a una mera cuestión de Orden Público, y desde un único enfoque acusador, era claramente distorsionadora de la realidad.

Sin embargo, el hecho de que el asesinato del representante máximo de esa línea política de la derecha, precediera inmediatamente al golpe de Estado que degeneró en Guerra Civil, contribuyó a fijar el esquematismo falsamente bipolar de planteamientos por él diseñado e incluso, con el tiempo, integró su lamentable muerte en el mito de la anarquía desencadenada por la izquierda/masas incontroladas, frente a la que el gobierno y las autoridades se mostraban, al tiempo, pasivos/inductores³⁹.

Menéndez Reigada, desde luego, se cuenta entre los que inculpan al gobierno de entonces del asesinato de Calvo Sotelo, en calidad de *impulsor del crimen*, cumpliendo con su propio programa. Para probar tan graves afirmaciones, bastaba simplemente «con abrir los ojos a la realidad histórica»⁴⁰.

Los juicios de la Pastoral Colectiva van en la misma línea:

«La Autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la *plebe* sus poderes... especialmente... en el período turbulento que corre de febrero a julio de 1936... cerca de 3.000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la Autoridad Pública»⁴¹.

III. *Traición del Gobierno de Frente Popular a la Patria y a la Nación.*

Como ya señalamos más arriba, la estrategia de la derecha de desgaste del gobierno de Frente Popular, establecía con insistencia la conexión entre desorden/anarquía impulsada o tolerada desde el poder y revolución sovietizante, que crecía de manera natural en el caldo de cultivo del caos.

Forma típicamente conservadora de ver las cosas, y en modo alguno mito de invención española, desde el ambiente revolucionario sufrido por Europa occidental y Central a partir de 1917, la burguesía europea veía siempre tras los procesos de inestabilidad política y social la posibilidad de avance de las fuerzas revolucionarias. Así, por ejemplo, apreciaba Churchill la evolución de la situación española durante el Frente Popular:

39 En un primer momento, las declaraciones de los principales jefes de la sublevación no incluían como pieza básica explicativa de su acción el asesinato del líder de la oposición, ni siquiera lo mencionaban. Incluso es inexistente cualquier referencia en el Manifiesto «Al País» tras la formación de la Junta de Defensa (Cfr. *Heraldo de Aragón*, Zaragoza, 25 de julio de 1936, p. 3).

Sin embargo en 1937, cuando la *guerra de tintas y ondas* ha generado ya fuertes batallas, comienza a recogerse en lugar preferente entre otros *antecedentes del desconcierto*, el asesinato de Calvo Sotelo. Para Franco, en el discurso pronunciado con ocasión del Primer Aniversario del Alzamiento, se trató de un *crimen de Estado* que precipitó el movimiento militar, mostrando el carácter suicida de toda dilación (cfr. *ABC*, Sevilla, 19 de julio de 1937, p. 3).

40 I. Menéndez Reigada, *La Guerra Nacional Española ante...*, op. cit., p. 44.

41 Cfr. *Heraldo de Aragón*, 6 de agosto de 1937, p. 3.

«Forma parte de la doctrina y de la táctica comunista, según lo estableció el propio Lenin, el que los comunistas contribuyan a todo movimiento hacia la izquierda y favorezcan la implantación de gobiernos débiles de tipo radical, constitucional o socialista. Los comunistas deben socavar los cimientos de esos gobiernos y arrancar el poder de sus vacilantes manos para establecer el mando absoluto y fundar el Estado marxista. En España estaba manifestándose una perfecta reproducción del período de Kerensky en Rusia»⁴².

Para Menéndez Reigada, el ataque a la Nación se manifestaba también en el separatismo, fomentado desde arriba y secundado por «las ambiciones de quienes pretendían medrar sobre los despojos de la patria deshecha», pero sobre todo y básicamente

«en el atentado contra la libertad e independencia de la Nación..., entregándola a la más ominosa esclavitud soviética, hasta el punto de considerar delictivo el grito de «Viva España», al cual se contraponía el vergonzoso grito de «Viva Rusia»⁴³.

Así pues, Menéndez Reigada centra claramente, con el sutil lenguaje de lo ideológico, lo que podríamos denominar contradicción esencial de la situación políticosocial española en la primavera/verano de 1936, en coincidencia con los enfoques que de ella hacía la derecha.

La amenaza real de una revolución comunista, entendida como especie de golpe de mano, está hoy demostrado que fue un fantasma del *miedo* conservador en una coyuntura muy difícil. Sería el general Mola quien corporizaría el fantasma en los micrófonos de Radio Castilla, atribuyendo el primado del movimiento revolucionario planeado, nada menos que a Azaña, el *monstruo*; por lo que se refiere a la fecha de la revolución más sangrienta del siglo XX que, según el Director, habría borrado literalmente a España del elenco de pueblos libres y civilizados de Europa, estaba fijada para el 29 de julio, puños en alto y a los sonos de La Internacional.

Franco se uniría pronto al coro de los difusores de la idea de la conjuración comunista, añadiendo el detalle de que los documentos pertinentes habían sido incautados tras el alzamiento y que en ellos quedaba claro el

42 W. S. Churchill, op. cit., p. 179.

Para un enjuiciamiento más matizado de la situación española y una exposición más lúcida de análisis, también procedente del campo del liberal-conservadurismo, vid. R. Arón, *Mémoires*, op. cit., particularmente los capítulos II a V de la Primera Parte, referentes a «L'éducation politique».

43 I. Menéndez Reigada, *ibid.*, op. cit., p. 44.

objetivo de la Internacional Comunista de procurar la entrega del país a los soviets rusos⁴⁴.

Posteriormente, la Carta Pastoral Colectiva también aceptaría la veracidad de la tesis de la conspiración para una revolución comunista, aportando curiosísimos datos probatorios y fijando los efectivos de las fuerzas subversivas en 150.000 soldados de asalto y 100.000 de reserva, señalando además la radio comunista número 52 de Madrid como el encargado de la tarea sucia de eliminación física de los líderes de la contrarrevolución⁴⁵.

Con mayor dramatismo en el lenguaje, Eijo y Garay saludaría en el levantamiento militar de julio la oportunísima anticipación a la revolución señalada por el marxismo para la implantación, por la violencia y el terror, de su tiranía:

«Enfundada en un conglomerado político heterogéneo e inconsciente, la *daga comunista* había subido, con fraude, al poder, desde donde preparaba la hora de desnudarse y clavarse en el corazón de España»⁴⁶.

La fuerza dirigente de la revolución era, pues, el *Comunismo*, pero no tanto una u otra de las formaciones concretas que en España remitían sus señas de identidad a 1917-1921, sino el Comunismo genérico que, controlado desde Rusia y utilizando —como diría la Pastoral Colectiva— sibilinos y sofisticados medios como el cine, el soborno, la propaganda de costumbres exóticas y los cantos de sirena de la intelectualidad, trataría de adueñarse de España. Junto a él, Menéndez Reigada señalaba con dedo acusador a la masonería, aliento e impulso secreto del Frente Popular, que aparecía moviendo las oscuras solidaridades *triangulares* de que hablaba *El Debate*⁴⁷.

IV. *El Gobierno de Frente Popular es enemigo de Dios y de la Iglesia.* Reigada cita en apoyo de tal tesis varias Encíclicas de Pío XI en que se descalifican con severas censuras el socialismo y el comunismo, en cualquiera de sus variantes, como «compendio de todo los errores, de todas las herejías,

44 La falsedad de los documentos de Tomás Borrás fue denunciada ya antes de la Guerra por *Claridad*. Southworth, por su parte, ha probado muy bien los evidentes elementos de manipulación del tema. Cfr. H. Southworth, *El mito de la Cruzada de Franco*, Edics. Ruedo Ibérico, París 1963, pp. 167-181.

De la posición de Franco se hizo eco *El Correo de Andalucía*, Sevilla, 9 de octubre de 1936.

45 Cfr. *Heraldo de Arazón*, Zaragoza, 6 de agosto de 1937, p. 3.

46 Cfr. Eijo y Garay, Pastoral *La Hora Presente*. Cit. por A. de Castro Albarrán, *El Derecho al Alzamiento*, op. cit., p. 397.

47 Cfr. I. Menéndez Reigada, *La Guerra Nacional Española...*, op. cit. También 'Acerca de la Guerra Santa. Contestación a Jacques Maritain', en *La Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos españoles*, nn. 167-168, septiembre-diciembre, Salamanca 1937.

de todas las impiedades»⁴⁸; las pruebas de lo afirmado por el Papa serían la enseñanza atea, el laicismo imperante en la legislación de la etapa republicana y, finalmente, la persecución desencadenada sin rebozo en la España republicana en guerra, iniciada verdaderamente antes de julio del 36.

Pero la descalificación global de la República antes de la sublevación militar, siempre en Menéndez Reigada y en los otros autores que comentamos, tiene un paréntesis bien marcado: el de la II Legislatura radical-cedista, hasta la subida al poder de Portela Valladares, período en el que se materializaría la voluntad de los católicos y otras sanas fuerzas por recuperar la República, cambiando radicalmente su signo.

Por eso el gobierno de Frente Popular sería realmente el continuador del de Azaña en el primer bienio, al que ya el Papa acusó en su momento de hacer la guerra a los más respetables principios sociales, a la Religión y al mismo Dios⁴⁹.

Para Castro Albarán, los pronunciamientos de Pío XI no podían sino interpretarse como claras manifestaciones de apoyo a las tesis de la legitimidad de la rebelión de 1936, pues el Pontífice encuadraba a España dentro de la negra trilogía de países persecutores del Cristianismo, junto con los Estados Unidos de Méjico y la URSS⁵⁰, con lo que obviamente la República era signada con la marca de un sistema no adecuadamente asentado en el principio del Bien Común.

Así pues, esquemáticamente, las proposiciones de Menéndez Reigada pretendían sentar de modo irrevocable la licitud e incluso necesidad del Alzamiento contra la República, dando por establecida la tiranía de ejercicio del poder del Frente Popular, teniendo como espina dorsal de su discurso las mismas tesis políticas sustentadas por Calvo Sotelo/Gil Robles y *ABC/El Debate*.

48 Así por ejemplo en la Encíclica *Quadragesimo Anno* podía leerse: «Nos no juzgamos seguramente necesario advertir a los hijos buenos y fieles de la Iglesia en lo tocante a la naturaleza impía e injusta del comunismo... Hemos llamado de nuevo a juicio al comunismo y socialismo y hemos encontrado que todas sus formas, aún las más suaves, están muy lejos de los preceptos evangélicos.»

En *Caritate Christi* se reflejaban parecidas concepciones: «Los enemigos de todo orden social cualquiera que sea su nombre: comunismo, socialismo u otros... se emplean con audacia en romper todo freno, en quebrar toda ligadura impuesta por ley divina o humana.»

49 Allocución de Pío XI de 3 de marzo de 1933.

50 A. de Castro Albarrán, *El Derecho al Alzamiento...*, op. cit., pp. 357-358. Lo curioso en un hombre de los conocimientos e información del Magistral de Salamanca, es que no cite con precisión la frase específicamente dedicada por Pío XI a la condena del gobierno republicano del primer bienio: «Quod iam diu continenterque accidit in immensis, iisdemque infelicissimis Russiarum regionibus; quod in Hispania; quod in foederatis Mexici civitatibus» (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, vol. 25, pp. 112-13).

Castro Albarrán es aún más decidido al negar taxativamente toda posible legitimidad al sistema surgido de lo que él considera *insoportable coacción* ejercida sobre la Institución encarnada por la persona de Alfonso XIII, cuya caída no acabó provocando, sin embargo, más que una mera suspensión temporal de unos derechos históricos. Las elecciones constituyentes y las del Frente Popular, sobre todo, que crearon situaciones idénticas fueron inválidas y dieron pie a un estado de tiranía, principalmente visible en el terreno de lo religioso⁵¹.

En una línea parecida se movería el jesuita Juan de la Cruz Martínez, para quien la legitimidad de la misma República de Abril sería muy *questionable* tras la quema de conventos de mayo, tolerada —según él— por el Gobierno. En efecto, tras el resplandor de las llamas habría quedado el rescaldo del *miedo* de la mayoría católica del país, con su reflejo político de deslegitimación del régimen, que se manifestó en el radical retraimiento ante los comicios constituyentes de junio y la propia Constitución de diciembre («violenta violación del sentir nacional») y ante la ilegal formación del ejecutivo tras las elecciones de noviembre de 1933⁵².

Superada la fase de *neutralidad* ante el poder en los primeros momentos de 1931, destinada tan sólo a asegurar la paz y tranquilidad generales, comprobada la ineficacia de oponerse puntualmente a las leyes injustas y fracasada la táctica posibilista encarnada por la CEDA (entendida incluso como *acatamiento excesivo* por hombres como Guallar, Sáinz Rodríguez o Bertrán, que consideraban como injusta la evolución demasiado rápida imprimida a las reformas por la República), era el momento del alzamiento, no sólo ilícito sino obligatorio⁵³, tal como después de efectuarse lo proclamaron Gomá, Olaechea, Eijo y Garay o la Pastoral Colectiva.

Dejando, pues, aparte fantasías del tipo de la inminencia de una revolución comunista, orientadas a conjurar el *miedo* que ante la ruptura de la legalidad sintieron los sublevados, es cierto que las amenazas de Gil Robles en el debate de Orden Público de abril del 36, en la línea de que la presunta persecución contra las derechas dificultaba crecientemente el mantenimiento en la legalidad de aquéllas, acabarían por concretarse en la sesión de la Diputación Permanente de 15 de julio, al afirmar el político salmantino que finalmente

51 Cfr. A. de Castro Albarrán, *El Derecho...*, op. cit., pp. 389-391, y *Guerra Santa...*, op. cit., pp. 92-94.

52 Cfr. J. de la C. Martínez, *¿Cruzada o Rebelión? Estudio histórico-jurídico de la actual Guerra de España*. Librería General, Zaragoza 1938. También su artículo, ya citado '¿Se lucha en España contra un poder legítimo?', en *Razón y Fe*, n. 476.

Para una adecuada contextualización del episodio de la quema de conventos y la actitud del gobierno y autoridades ante ella, resulta imprescindible, como testimonio de primera mano, la lectura de las Memorias del entonces Ministro de la Gobernación. Cfr. M. Maura, *Así cayó Alfonso XIII*, Ed. Ariel, Barcelona 1968, 5.ª edición, pp. 240 y ss.

53 A. de Castro Albarrán, *El Derecho...*, op. cit., pp. 395 y ss.

un espíritu de *sana rebeldía*⁵⁴ prendía en la conciencia de sectores muy amplios de la opinión por él representada, para quienes el asesinato de Calvo Sotelo significaba una situación de anomía, la ruptura desde el poder político del pacto social garante de la convivencia y la expulsión de la masa conservadora del marco institucional/legal, frente a lo cual no quedaba sino el recurso a las armas⁵⁵.

Parecería, pues, de lo que venimos exponiendo, que la derecha y algunos de sus portavoces políticos o eclesiásticos tenían perfectamente claro antes de la guerra, que estaban en su pleno derecho a rebelarse y que tenían completamente elaborada una doctrina al respecto. Sin embargo, un documento trascendental como la Pastoral de Pla i Deniel «Las dos Ciudades», muestra claramente lo contrario: la práctica es lo primero y sólo de ella surgen las exigencias de justificación en el plano teórico. Pla, tras reconocer que el asunto está insuficientemente tratado en los manuales de Teología Moral⁵⁶, donde hay incluso autores que «con excesiva ligereza y generalidad» enseñan la ilicitud de toda rebeldía o preconizan formas no violentas de resistencia, afirma tajantemente que «en la moral católica, lo que puede lícitamente practicarse debe ser también propugnado y razonado en el orden teórico»⁵⁷, siendo la licitud de la rebelión efectuada mero producto de las propias aseveraciones, hechas —según se reconoce— sin un suficiente y seguro respaldo doctrinal.

En estas condiciones, resulta quizá un tanto extremada la seguridad de Castro Albarrán al afirmar como conclusión de su «Derecho al Alzamiento»:

«cuando la sustancia de la legalidad es la injusticia, no le queda a la conciencia y a la acción más recurso que buscar la justicia en la legítima ilegalidad»⁵⁸.

Más bien parece que la derivación de la rebelión en contienda civil (y en persecución para la Iglesia en la zona bajo control de la República), obligó a llenar una *laguna doctrinal*, calmando así el miedo moral causado por el desastre desatado. Esto forzó a echar mano de materiales teóricos como los

54 «... sana rebeldía que en términos genéricos habéis dado en llamar fascismo». Cfr. Apéndice V a las Memorias de Gil Robles, *No fue posible la paz*, op. cit., u. 808.

55 Cfr. J. M. Gil Robles, 'Spain in Chain', citado por R. Robinson, 'La República y los partidos de la Derecha', en la obra colectiva dirigida por R. Carr, *Estudios sobre la República y la Guerra Civil*, Edit. Ariel, Barcelona 1974, p. 103.

56 Desde óptica tan humilde como ésta, extraña la seguridad de los legitimadores salmantinos en la descalificación totalizante de la República: «echar una ojeada», «los hechos mismos lo prueban», «es evidente», «apenas parece discutible», «pasemos por alto la cuestión de...», etc., son frases reiteradamente empleadas para referirse a la problemática de la presunta ilegitimidad del régimen republicano.

57 E. Pla i Deniel, *Las Dos Ciudades*, 30 de septiembre de 1936, p. 18.

58 A. de Castro Albarrán, *El Derecho...*, op. cit., p. 398.

de Castro Albarrán. Pero en el fondo, para este autor, resulta tan insegura doctrinalmente como para Pla la justificación de un Alzamiento que tuvo tamañas consecuencias, particularmente para la Iglesia. Prueba de ello es que el Magistral de Salamanca afirma, con tautología evidente, que era el mismo levantamiento por él auspiciado como un Derecho, el que demostraba la validez de tal Derecho⁵⁹.

2. LA GUERRA SANTA

2.1. *Legítima defensa y represión*

Producido el levantamiento del 17 de julio y extendido en los días siguientes a gran parte del territorio español (entre otros lugares a Salamanca el día 19), cae el Gobierno Casares Quiroga y, tras los intentos apaciguadores de Martínez Barrio⁶⁰, se da paso a un nuevo gabinete formalmente casi idéntico al dimisionario, pero que, al satisfacer la demanda de *armas para el pueblo*, acaba por apoyarse sustancialmente en los partidos y sindicatos obreros⁶¹, los cuales, como señalamos más arriba, al estar profundamente desunidos, aportarán al esfuerzo de defensa unos puntos de vista, objetivos y medios tácticos, profundamente diferenciados. Los efectos del golpe de Estado no modifican esta situación, si no es para evidenciarla y aumentarla, pese a las declaraciones de líderes y organizaciones, que responden con proclamas de encendida unidad ante una coyuntura de emergencia.

Del lado sublevado, momentáneamente tampoco hay una clara hegemonía política de nadie, ni unidad de objetivos ni de mando, si bien socialmente los apoyos de los alzados son diversos de los del bando leal.

⁵⁹ Ibid., pp. 5 y ss.

⁶⁰ Respecto al intento de formación del Gobierno Martínez Barrio, las propias Memorias del político sevillano son escasamente clarificadoras. Cfr. D. Martínez Barrio, *Memorias*, Editorial Planeta, Barcelona 1983.

Quizá los esfuerzos del Presidente de las Cortes sí fueron un fracaso desde el ángulo de un «rápido acabamiento del grave conflicto planteado», tal como señaló la prensa del momento. Vid. *El Socialista*, martes, 21 de julio de 1936.

Pero quizá el fracaso de su gestión favoreció (en medida y forma desconocida) la causa de la defensa de la República. Franco, en el discurso del primer aniversario del Alzamiento, culpa a Martínez Barrio de haber arrastrado hacia el lado de la lealtad republicana a gran número de oficiales tibios o vacilantes, particularmente a todos los que, siendo masones, estaban dispuestos a seguir las lealtades *triangulares* del Gran Oriente.

⁶¹ «Cierto es que el Estado y sus poderes legítimos se encuentran asistidos con el más desinteresado y admirable de los concursos, de las clases obreras, representadas por sus sindicatos y partidos. Así el Socialista como el Comunista, así la CNT como la UGT, así la Federación de Grupos Libertarias como el Partido Sindicalista» (*El Socialista*, Madrid, domingo, 2 de agosto de 1936, p. 3).

En ambas zonas, empero, el mismo «brouillard de guerre». En una parte, el orden civil es sustituido por los bandos de guerra, que evidencian la desaparición de la normalidad de funcionamiento de las administraciones públicas. En la otra, las instituciones quedan indefectiblemente cuarteadas y asisten impotentes a la fulgurante aparición de una ola consejista/localista, de tipo revolucionario, que guarda no pocas semejanzas con otras situaciones históricas de nuestro siglo XIX.

Y en todas partes se produce una explosión de miseria moral. La situación de anomía producida, transforma el *miedo* en un verdadero *gran pánico* que tiñe de sangre el suelo patrio. Los desatinos son evidentes y las mismas autoridades deben hacerse eco de ellos. Así, por ejemplo, el Gobernador de Valladolid tiene que recordar en la prensa sus disposiciones de 28 de julio sobre el orden público, porque son reiteradamente incumplidas⁶². De la misma manera que en Madrid los diarios de partido deben hacer llamadas sobre la comisión de desmanes y recordar a la población cuál es la legalidad (por más que transformada) en vigor⁶³.

La explicación justificadora de la situación acaecida en los primeros momentos de la guerra en zona sublevada, ocupa el Discurso Inaugural del comienzo de Curso Académico 40-41 en la Universidad de Salamanca⁶⁴. Para el orador, Catedrático de Derecho Penal, se trata de analizar el fenómeno de la sublevación de julio desde un ángulo jurídico, técnico-penal, para poder explicar ciertos hechos aislados delictivos. La tesis general defendida es que «el Alzamiento Nacional Español comenzó siendo un caso magnífico de legítima defensa»⁶⁵.

Pronunciado el discurso ya acabada la guerra, la represión que aún existe queda al margen del estudio, por cuanto se considera ya ejercida dentro de un marco legal. Son, por el contrario, los *sucesos* de las primeras semanas los que merecen la atención del catedrático salmanticense. Basándose en autores cuyas obras nunca se citan a pie de página, como Jerónimo Montes, Francisco Carrara e incluso (con las oportunas salvedades y reafirmaciones ortodoxas) los positivistas Ferri y Florián, acepta y da por bueno lo ocurrido en la España sometida a los Bandos de Guerra, considerando que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 8.º del Código Penal español en los supuestos de legítima defensa: agresión ilegítima —actual o inminente—, necesidad imperiosa de repelerla, no existiendo eventualmente medios jurídicos para hacerlo y falta de provocación en el defendido.

62 Cfr. *El Norte de Castilla*, Diario Independiente de Valladolid, viernes, 14 de agosto de 1936, p. 1.

63 Cfr. *El Socialista*, Madrid, martes, 28 de julio de 1936, p. 1.

64 I. Sánchez Tejerina, *Oración Inaugural del Curso de 1940 a 1941 en la Universidad de Salamanca*. Imprenta y Librería Hijos de Francisco Núñez. Salamanca.

65 *Ibid.*, p. 7.

La ilegitimidad del sistema encarnado por la República es un problema que Sánchez Tejerina desconsidera, justamente por la obviedad de su solución⁶⁶. Sin duda tiene bien presente todos los elementos doctrinales a que nos referimos en el apartado anterior, engrandecidos incluso con la victoria del 39. Sobre las agresiones a personas, vidas, bienes, valores y derechos, acepta también sin discusión los argumentos empleados por Calvo Sotelo en el Parlamento en abril de 1936, elevando el asesinato del político monárquico a prueba irrefutablemente paradigmática de la inutilidad del empleo de medios individuales y legales de defensa, dada la corrupción insuperable de la legalidad.

Incluso ejemplos de la vida cotidiana presenciados por el penalista salmantino en Asturias o Madrid, probarían la inutilidad de la defensa individual. Los casos narrados se engloban bajo una tipología de *truculencias de energúmenos* contra *personas decentes*, de *injustificados ataques* de ateos/marxistas/criminales/agentes provocadores/malos españoles/antipatriotas/extranjerizantes, que con sus provocaciones antirreligiosas demostraban el sentido de sus *triangulares* concepciones de libertad, igualdad y fraternidad⁶⁷.

También para el dominico Luis Getino las provocaciones tuvieron un contenido de persecución religiosa, materializado en el ensañamiento contra el arte cristiano, la blasfemia como consigna y sello de identificación, las continuas agresiones destinadas a machacar la forma de vida católica, todo lo cual hacía recordar al buen hijo de Santo Domingo las pequeñas persecuciones sufridas por él a manos de *judíos*:

«Yo tenía que recordar con frecuencia mi visita a Amsterdam hacía más de veinte años, en la cual los judíos con quienes me cruzaba en la calle me dirigían constantes improperios»⁶⁸.

Los bienes objeto de ataque por el sistema republicano eran para Getino la Patria, la Familia con todo su bagaje de valores y costumbres tradicionales, así como las imprescindibles jerarquías de la vida social, comprometidas por la exaltación del odio de clases, «herencia miserable del liberalismo económico»⁶⁹.

En tales condiciones de vida nacional, ante la conciencia de posibilidad de agresiones permanentemente inminentes, vacante la Autoridad, no quedaba otro medio por emplear más que una defensa de carácter colectivo y armado, aceptable según la doctrina de Vitoria y el *ilusorio* Pacto Kellog-Briand:

66 Ibid., pp. 13 y 15.

67 Cfr. Sánchez Tejerina, op. cit., pp. 21 y 22.

68 L. Getino, 'El Derecho de Gentes a través de la Guerra Española', en *La Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos españoles*, año 29, n. 75, tomo 57, fasc. 6, Salamanca 1938, p. 496.

69 L. Getino, *ibid.*, p. 500.

«El estado de persecución en que estábamos los católicos, de provocación y de insulto a lo que más amamos, provocó la defensa, la reacción, la lucha del 17 de julio, en una gran parte de la masa insurrecta, calificada de rebelde y facciosa. Ese gran sector se lanzó a la rebeldía para defender el reinado de Dios sobre nosotros»⁷⁰.

Pero la cuestión de la justificación de los posibles hechos delictivos aislados o excesos cometidos (por emplear los términos de Sánchez Tejerina), no quedaba establecida con tan ardientes aseveraciones. La amplia difusión que habían tenido sucesos como los sobrevenidos tras la ocupación de Badajoz por la Columna del Sur y otros muchos de los que se hacía eco el Informe del Colegio de Abogados de Madrid⁷¹, la testificación de cargo de gentes como Bernanos, Maritain o Luigi Sturzo, nada proclives al bolchevismo, las propias experiencias vividas por la población, las declaraciones amenazadoras en prensa y radio de los mismos jefes de la sublevación, o las más escasas llamadas a la concordia y al perdón de Yagüe, Hedilla o Monseñor Oalechea, exigían inaplazablemente una respuesta.

En plena Guerra, Castro Albarrán⁷² negaría la existencia de todo exceso, calificando la opinión de quienes sostenían que se habían dado, de «insensatez», «criminal calumnia», «intención torcida y malévola». Frente a tales versiones estaría el silencio de los obispos españoles y el testimonio vivido por los propios clérigos que auxiliaban en sus últimos momentos a los condenados. Estos, en cualquier caso, eran penados en virtud de la acción de tribunales que les habían declarado «civiles» y, por lo tanto, era falaz hablar de «terror blanco», como se había hecho con ocasión de la ocupación de Badajoz y se seguiría haciendo después. Los excesos había que probarlos; si los hubiere eran menores que los cometidos por los «rojos»; en cualquier caso, tenían un carácter aislado y, como mucho, podían sólo demostrar que la guerra esporádica u ocasionalmente no se hacía santamente, sin que por eso pudiera negarse que globalmente considerada fuera realmente una Guerra Santa. Ni una palabra, por supuesto, sobre aquellas acciones bélicas que tenían un directo efecto sobre poblaciones civiles.

Ya acabada la Guerra, con perspectiva algo más desapasionada, Sánchez Tejerina se planteaba también el problema de los posibles *excesos en la defensa*. En primer lugar, la licitud de la legítima defensa exigía que los medios

70 Ibid., p. 496.

71 *Informe del Colegio de Abogados de Madrid sobre violaciones de los Derechos Humanos practicadas por los militares sublevados*, octubre de 1936. Anexo al libro de A. Reig, *Ideología e historia. Sobre la represión franquista en la Guerra Civil*. Ediciones Akal, Madrid 1984, pp. 161-66. El Informe se hacía eco de la muerte del diputado salmantino señor Manso, en la forma rumorológica e inexacta que circuló también por la Salamanca en guerra.

72 Cfr. A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, *op. cit.*, pp. 364-365.

empleados fueron los racionalmente adecuados; pero teniendo en cuenta la inexistencia de provocaciones por parte de los sectores perseguidos, antes de la sublevación de julio ⁷³, en primer lugar habría que atribuir su cuota parte en las equivocaciones, errores o excesos de la represión nacionalista, prioritariamente a los provocadores y no a las víctimas que se defendieron. Además, la proporcionalmente adecuada racionalidad en el empleo de medios de defensa destinados a repeler la agresión, no podía tomarse (según la doctrina de Silvela comúnmente aceptada por los penalistas españoles) en sentido absoluto:

«basta que se haya creído que la defensa era precisa y los medios adecuados; porque no cabe esperar que en la situación en que se hallaba el acometido tuviera la suficiente tranquilidad de espíritu para hacer los raciocinios, cálculos y comparaciones que fácilmente se ocurren en la tranquilidad de gabinete» ⁷⁴.

Ante un peligro inminente e inevitable, ya Saavedra Fajardo reconocía la posibilidad de cometer errores, nunca imputables al agredido. Como también reconocía que el *impulso del miedo* evita cometer culpa a quien se defiende de una agresión. Idénticas opiniones sostendrían también, según Sánchez Tejerina, Impallomeni e Isaías Pufendorf —sic—. Las mismísimas Partidas, afirmarían también la posibilidad de excederse en la defensa, para evitar fenecer a golpes de la provocación agresiva antes incluso de iniciar la misma defensa. Pero sobre todo, el acusado de excesos en su propia defensa, sería preciso aplicarle el principio de no extensividad de las leyes penales en su aspecto odioso o punitivo.

En conclusión, el exceso en la defensa en 1936, sería justificable por el impresionante desequilibrio de las fuerzas en presencia, que habría provocado un *miedo* capaz de confundir el juicio ante la urgencia de decidir por unos u otros medios. En tales condiciones

«el exceso, como se ve, más que una excusa, y mejor que una causa de justificación, es sin duda, una causa de inimputabilidad, por falta de conciencia y voluntad, o, como decía Isaías Pufendorf —sic—: «propter perturbationem animi» ⁷⁵.

⁷³ Para el P. Juan de la Cruz Martínez, incluso la famosa carta de Franco, Comandante General de Canarias, a Casares Quiroga, Presidente del Gobierno, habría que considerarla como expresión escrupulosa de la leal advertencia que se precisa hacer al enemigo —sic— antes de proceder a la declaración de guerra y desencadenamiento de hostilidades. Cfr. *¿Cruzada o Rebelión?*, op. cit., pp. 189-90.

⁷⁴ I. Sánchez Tejerina, op. cit., p. 11.

⁷⁵ Ibid., p. 24.

Las consecuencias políticas de tal doctrina son bien simples: en el Movimiento Nacional, en «nuestra Revolución», según expresión también utilizada por Sánchez Tejerina⁷⁶, todo fue legítimo porque el estado de necesidad así lo hacía creer, no teniendo que ver nada con esto aquellos crímenes o delitos que pudieran haber cometido particulares durante el *glorioso* proceso histórico.

«Otra cosa bien distinta fue lo acontecido en el campo marxista, donde existían tribunales oficiales que con apariencia de legalidad condenaban a muerte, o por orden de esa misma autoridad, y sin aquella apariencia legal, se sacaba de sus domicilios y se asesinaba a las personas... Aquí los resortes de autoridad funcionaron rápidamente, en apoyo del orden y la justicia, y en la zona marxista, o la autoridad era cómplice, o no existía tal autoridad, por culpa precisamente de los propios gobernantes. De aquí que al enjuiciar estos hechos y valorarlos a la luz de los principios penales, haya que declarar justificables unos y punibles los otros»⁷⁷.

76 Sobre la ocasional atribución por los autores salmantinos a que aquí nos referimos del término «revolución» para referirse al Movimiento Nacional, particularmente de Sánchez Tejerina cuando aborda el problema de la represión, resultan muy sugestivos los juicios de Raymond Aron en sus Memorias. Para el conocido intelectual francés, la autoconsideración de «revolucionarios» por parte de los regímenes fascistas, no es algo meramente folclórico-propagandístico; la ruptura del sistema de valores y principios de la civilización europea *conservados* por los regímenes democráticos, fue el elemento definitorio de los fascismos, tanto en el orden internacional como nacional. De ahí la extrañeza de Aron en plenos años treinta ante la tolerante simpatía que los liberal-conservadores ingleses o franceses sentían hacia los totalitarismos del extranjero que, a la postre, acabaron por amenazar de muerte definitiva los sistemas de vida política *conservados* en Francia e Inglaterra. Sólo el inmenso holocausto de la II Guerra Mundial y la clara demostración hitleriana de querer organizar un mundo nuevo (al menos radicalmente distinto del construido por la burguesía y los trabajadores democráticos desde el siglo XIX) hizo variar las cosas: «Le ralliement de toutes les classes dirigeantes de l'Europe Occidentale aux institutions démocratiques après 1945 s'explique par l'expérience des *révolutions de droite* et par une juste appréciation des régimes représentatifs». R. Aron, op. cit., pp. 155-6.

En el discurso del 2.º aniversario del Alzamiento, Franco señalaría: «La Autoridad, la Moral y el Trabajo serán las características de los nuevos jefes. No hemos de medirlos por su cuna o su posición, sino como las Ordenes Monásticas, en que las prerrogativas y la alcurnia desaparecen bajo el uniforme común». Cfr. *ABC* de Sevilla, 19 de julio de 1938, p. 9.

Y también: «a un Estado neutro y sin ideales, le sustituye el nuestro, misional y totalitario, que orienta al pueblo señalándole el camino que le conduce...». *Ibid.*, p. 9.

77 Sánchez Tejerina, op. cit., p. 18.

La justificación de lo que el catedrático salmantino llama el «ciclo de defensa inorgánica colectiva» de los primeros momentos del Alzamiento, dio paso pronto a otro de «defensa jurídica militar y social». Sobre ambos, principalmente el segundo, resulta imprescindible la lectura de las Memorias de otro jurista notable como Serrano Súñer, para quien ese segundo ciclo que en Sánchez Tejerina es legal y, por tanto legítimo, fue más bien un ciclo de «*justicia al revés*». Cfr. R. Serrano Súñer, *Memorias. Entre el silencio y la propaganda. La Historia como fue*, Editorial Planeta, Barcelona 1977, pp. 243-252.

2.2. *Revolución, persecución, cruzada*

Como ya señalamos más arriba, el efecto inmediato de la sublevación militar fue el cambio en el equilibrio político de la España leal y la ruptura del marco institucional y el normal funcionamiento de la Administración. Una serie muy variada de nuevos órganos de poder, de base popular y ámbito geográfico local, sustituyeron al usual entramado estatal. Y junto a ello, un proceso de revolución social que adquiere tonos y gradaciones muy variados, según las diferentes regiones y según la correlación en cada lugar de las fuerzas sociopolíticas.

En general, las medidas revolucionarias decretadas por estos nuevos poderes actuaron en el sentido de acelerar las reformas esbozadas por los gobiernos de la I y III Legislatura, profundizando los avances en el sentido de superar las estructuras de producción y distribución propias del capitalismo.

Políticamente, la historia de la España republicana en guerra, viene definida por una primera fase de legalización de las medidas revolucionarias espontáneamente adoptadas por los poderes locales, que va seguida de otra de ásperas confrontaciones entre el Poder Central/Poderes autónomos y locales, a la que acompaña una tensa e incluso violenta dialéctica entre las distintas fuerzas por imponer la propia visión de la Guerra y la revolución en curso, tratando de condicionar en el mayor grado posible a un gobierno Central que poco a poco se afirmaba e iba adquiriendo vigor, reconstruyendo sus aparatos y superando la fracturación inicial con cierta homogeneidad de programa.

Quizá sólo los comunistas mantuvieron que en la zona republicana no se asistía a un proceso revolucionario anticapitalista, sino meramente a una fase avanzada de la revolución democrático-burguesa⁷⁸ aún pendiente de verificarse en España, por lo que se hacía preciso reconstruir el Estado y mantener en lo posible el normal funcionamiento institucional, con la consolidación de la alianza de clases en que se había apoyado la República desde su nacimiento. Para los comunistas, la revolución socialista era imposible, incluso no deseable y, además, comprometía la propia marcha de la guerra⁷⁹. Junto a ellos, en idéntica postura, acabarían por situarse en general los socialistas y los casi simbólicos —desde julio— partidos republicanos de izquierda. Bajo la dirección del PCE se pudo llevar a efecto, en mayo del 37, la definitiva liquidación de los sectores sociopolíticos que consideraban la revolución como el único

78 Cfr. P. Togliatti, *Escritos sobre la Guerra de España*, Grijalbo, Barcelona 1980.
D. Ibárruri (Dir.), *Guerra y Revolución en España, 1936-1939*, Ed. Progreso, Moscú, 1967-1977.

79 Sobre la conexión entre esta actitud «conservadora» del PCE-SEIC y las dificultades de abastecimiento de armas de la España leal, véase A. Viñas, *Las condiciones internacionales*. En la obra colectiva dirigida por M. Tuñón de Lara, *La Guerra Civil cincuenta años después*, Ed. Labor, Barcelona, 1985, pp. 125-194.

camino para la victoria; a partir de los sucesos de mayo, el POUM y la CNT sobrevivieron en ocasiones bajo condiciones de persecución, de terror incluso⁸⁰.

Para los sucesivos gobiernos republicanos, la revolución y la ruptura del poder de los órganos del Estado, eran caras de una misma moneda, cuyos responsables eran los propios sublevados, al desencadenar con su rebeldía el torrente de una revolución que decían querer prevenir:

«Toda la rebelión descansa sobre un supuesto de falsedad: el de aparentar creer que la gobernación del país está secuestrada por poderes ilegítimos y que el triunfo del Estado se traduciría en la implantación de un régimen político comunista»⁸¹.

Pero si en los supuestos de los rebeldes existía una falacia notoria, no era menos manifiesto que su acción había abierto un proceso de cambios ya irreversibles. El propio Martínez Barrio en su famoso discurso en los micrófonos de Unión Radio de Valencia, había dicho:

«No creo en la posibilidad de que al día siguiente del triunfo de la República pueda levantarse un aparato del Estado igual al que existía el 18 de julio, con las mismas representaciones y los mismos derechos. Allí se rompieron todos los escalafones, los rompió violentamente la codicia, la ambición, la avaricia o la flojedad. Pues bien. Cuando España proclame su voluntad política triunfante, no espere nadie que vuelvan a infiltrarse dentro del Estado las representaciones que lo traicionaron o que claudicaron... He aprendido la gran lección, producida después de la rebeldía militar, y es que no puede contarse conmigo ni con nada de lo que yo represento, para levantar un estado social, económico y político igual o parecido al que ellos atacaron»⁸².

El Presidente de la República, por su parte, en sus dos Mensajes conmemorativos del comienzo de las hostilidades, al preguntarse qué negocio era ése de desencadenar la guerra civil, se situaba en un plano de distancia frente a los acontecimientos, insistiendo en que la sublevación era fundamentalmente una cuestión de orden público interno: una formidable alteración de la paz interior y que, en definitiva, la explotación del mito de la revolución comunista inminente, como coartada de una rebelión transformada en guerra, había llevado al país ante la monumental catástrofe de incalculables pérdidas humanas y materiales que todos los españoles (por igual en cuanto tales) pagarían durante generaciones:

80 D. T. Cattell, *Communism and the Spanish Civil War*, U.C.L.A. Press, 1955.

81 Cfr. *El Socialista*, Madrid, domingo, 2 de agosto de 1936.

82 D. Martínez Barrio, *Un Informe. Una Opinión. Una Orientación*. Discurso de Valencia, el 31 de enero de 1937.

«y aquellos que pensaban en sus intereses, [se hallaban] profundamente lesionados en su interés particular mucho más que si la República, en vez de ser parlamentaria, hubiera sido una República revolucionaria»⁸³.

Con la misma seguridad de los Presidentes de las Cortes y de la República, el del gobierno —en concreto el doctor Negrín— mostró también en reiteradas ocasiones que la República estaba segura de comparecer ante el juicio de la Historia como la defensora del orden legal. En su discurso ante el Congreso, reunido por última vez en Figueras, reafirmaba la que había sido voluntad del Ejecutivo durante la contienda, en el sentido de actuar como gobierno de autoridad, legal y constitucionalmente legítimo, respetuoso de las normas aún en momentos de tamaña violencia, luchando denodadamente para probar estas verdades al mundo y haciendo comprender a éste que tal voluntad de sujeción a la ley era el único fundamento posible de la lealtad a pactos y acuerdos internacionales, mientras que los rebeldes, al no respetar la propia legalidad nacional, era ilusorio que prestasen asentimiento a otra cualquiera de tipo internacional.

Para los sublevados, sin embargo, la República, desbordada ya antes de julio, había mostrado su verdadera faz revolucionaria ante la presión del Alzamiento:

«El gobierno de la República, disuelto al corrosivo de la *barbarie* que tutelaba, ha entregado el poder de la capital de la nación a las turbas abandonadas a sus odios»⁸⁴.

Ciertamente los alzados, y Mola entre ellos, eran conscientes de hasta qué punto la sublevación había cuarteado el normal funcionamiento del Estado y cómo la ruptura de la legalidad había dado paso a una resistencia popular muy fuerte, en medio de la cual, la miseria moral aparecía también con marcada fuerza. El *miedo* que la posibilidad de destrucción de la República produjo en los sectores populares, desató tensiones sociales hasta entonces contenidas y se tradujo en una violencia que se expandió con relativa facilidad, ante la falta de los normales medios de coerción estatal. Detenciones, paseos, controles, registros ilegales, etc., evidenciaron los efectos de la anomía creada⁸⁵.

Y es que, si bien el relativo vacío de poder creado dio paso a una situa-

83 Cfr. *El Socialista*, Madrid, 19 de julio de 1938, p. 1. Véase también *El Socialista*, Madrid, 19 de julio de 1937, p. 2.

84 El general Mola en su Alocución al País, dando cuenta de la formación de la Junta de Burgos. Cfr. *El Norte de Castilla*, Valladolid, viernes, 24 de julio de 1936, p. 1.

85 Para un estudio de los tipos de violencia en las dos zonas de la España en guerra, así como de la respectiva actitud de las autoridades ante ella y de la elaboración ideológica a la que el problema dio lugar, véase A. Reig, *Ideología e Historia...*, op. cit.

ción revolucionaria destinada a cambiar las estructuras establecidas, en un primer momento tuvo como efecto más visible el de la rápida y espontánea reacción contra los miembros de colectivos socioprofesionales a quienes la población consideraba responsables de la conspiración y aliados objetivos de los sublevados.

Las llamadas a la moderación y respeto a la ley, por parte de autoridades⁸⁶ y organizaciones, no serían sino el reconocimiento de las dificultades para imponer el respeto a una legalidad rota —se pensaba— por aquellos mismos a quienes se perseguía:

«nos declaramos —decía *El Socialista*— enemigos de toda acción de violencia en las personas y en las cosas, cualquiera que sea el designio con que se acometa. Para juzgar a cuantos han delinquido disponemos de la ley. Mientras dispongamos de ella necesitamos acatarla. Con ella, todo lícito; sin ella, nada... sólo conformando nuestra posición con los dictámenes de la ley, podemos sacar indemnes de las actuales vicisitudes aquella victoria moral que nos es indispensable para seguir disfrutando de la ayuda valiosa de la conciencia universal. Que la ley se cumpla en tantos casos como deba cumplirse, pero fuera de la ley... que nadie se autorice licencia alguna»⁸⁷.

A veces, sin embargo, tan grave como la acción espontánea de ciertos sectores políticos o sindicales, fue la política por ellos inspirada y realizada desde el poder gubernamental. Tal es el caso de la presencia de García Oliver en Justicia durante el Gobierno de Largo Caballero. Para el líder anarquista, su tarea al frente del Departamento habría consistido en un intento de revolucionar, desde una óptica social, los criterios de legalidad: había que lograr que, en adelante, los delinquentes que ocuparan las cárceles pertenecieran a otros grupos sociales diferentes de los que hasta entonces habían ofrecido tradicionalmente los mayores porcentajes de población reclusa. Según palabras del Ministro, lo deseable era que en el futuro poblasen las cárceles fundamentalmente obispos, banqueros y catedráticos⁸⁸.

En realidad, García Oliver continuaba una política abierta en la etapa Giral⁸⁹, en que, transigiendo con el espontaneísmo de las primeras semanas,

86 Sería muy interesante disponer de estudios acerca de los diversos aspectos de la política de Orden Público de la zona leal, más allá de las usuales referencias en la bibliografía a tal o cual medida o situación.

87 *El Socialista*, Madrid, domingo, 23 de agosto de 1936, p. 1.

88 Cfr. J. García Oliver, *El eco de los pasos*, Ed. Ruedo Ibérico, Barcelona 1978, pp. 356 y 391.

89 Véase por ejemplo el Decreto sobre Clausura de Centros e Instituciones religiosas, firmado por el Ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón y redactado en su artículo 6.º con vistas a permitir la más amplia discrecionalidad. (*Gaceta de Madrid*, 13 de agosto de 1936, n. 226.)

se había hecho desaparecer casi completamente todo vestigio de vida pública de la Iglesia, salvo en el País Vasco. Y hablamos de la Iglesia y no de otras instituciones cuyos miembros sufrieron los efectos de la violencia, porque este hecho sería determinante para fijar la imagen de Guerra de contenido religioso o sacral, a la que enseguida nos referiremos.

Para Menéndez Reigada, justamente esta persecución contra la Iglesia determinaría el carácter profundo que la guerra tenía en el lado republicano, donde una verdadera *furia luciferina* habría arremetido contra todo lo santo, llegando a 16.000 el número de sacerdotes mártires a finales de 1937⁹⁰.

La Pastoral Colectiva, a su vez, que corroboraba una larga serie de pronunciamientos individuales de obispos españoles, consideraba también que la persecución sufrida por la Iglesia daba a la guerra su verdadero sentido, convirtiéndola en una apuesta decisiva a favor o en contra de la Religión de Jesucristo y la Civilización Cristiana. Para evitar una justificación de la represión republicana, los obispos insistían en que los sublevados lo habían sido a título personal, habiendo estado la Iglesia (como por otra parte parece estar suficientemente reconocido hoy), al margen de la conspiración. Sin embargo, el apoyo militante a los sublevados y la identificación con éstos desde los primeros momentos, por más comprensible que pueda parecer, lo cierto es que favoreció la persecución, aún en el supuesto de que ésta se hubiera desarrollado de todas formas. Ese era el *miedo* moral que quizá sentían los obispos: el de haber sido estimuladores indirectos del desencadenamiento de la ola anticatólica que barrió media España. Para conjurar ese *miedo*, la Pastoral Colectiva acudía a la tesis de la revolución comunista inminente, dirigida por ocultos poderes, en que la soviétización de la economía se decía iría acompañada del «exterminio del clero católico y de los derechistas calificados». Las derivaciones de la guerra y los apoyos internacionales conseguidos por la República, singularmente el de la URSS, serían pruebas adicionales de que la contienda era una partida entre el bolchevismo revolucionario, de una parte y la civilización cristiana, de otra.

La Carta insistía en la crueldad de la revolución española contra las personas, su carácter destructivo contra los bienes eclesiásticos, su inhumanidad y desprecio de los valores humanos esenciales, su barbarie visible en el daño a las obras de arte de inspiración sacra, su antiespañolidad y su oposición al Derecho de gentes. Es decir, era esencialmente anticristiana. Frente

90 Cifra superior al doble de la que Montero da para todo el período de 1936-39. Cfr. A. Montero, *Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939*, BAC, Madrid 1961.

a las tinieblas de tal panorama, la zona nacionalista resplandecía con antagónicas claridades luminosas⁹¹.

Los autores salmantinos que estudiamos, se sitúan manifiestamente en la línea de la Pastoral Colectiva. Y lo primero que sorprende de lo que en sus escritos podríamos llamar los *objetivos de guerra*, es el rechazo a calificar la contienda civil como una cuestión puramente terrenal, marcándole fines superiores y aún divinos.

Castro Albarrán, con curioso procedimiento hegeliano, comienza su caracterización de la guerra justamente por lo que no es. No es una pura guerra civil, ya que no se debate cuestión dinástica o de régimen de gobierno, ni de organización central o descentralizada del Estado. La aceptación de esa perspectiva secular supondría un acatamiento de las consignas comunistas:

«es natural en la horda roja este afán *laicizador* de la guerra española. Despojado nuestro levantamiento de su significación religiosa, que le da altura de *cruzada*, queda rebajado al plano despreciable de cualquier vulgar pronunciamiento. Y esto es lo que al comunismo español interesa: poder presentar al mundo el glorioso Movimiento Nacional como una militarada más que ha engendrado una guerra civil»⁹².

Tampoco es un conflicto de clases (tal como se pretendería en el extranjero), surgido de una reacción fascista⁹³, si bien es el resultado de una reacción similar a la que representan los fascismos, de defensa del principio de autoridad frente a la anarquía.

Basándose en textos de Pla i Deniel y Gomá, se afirma el sesgo esencialmente religioso de la Guerra. La contienda sería una lucha entre el espíritu

91 Carta Colectiva del Episcopado Español, en *Pastorales de la Guerra de España*, Edic. Rialp, Madrid, 1955.

Sorprende aún el lenguaje empleado en la Pastoral. Hay expresiones del siguiente tenor: «amputado miembros», «sacado ojos», «cortado la lengua», «abierto en canal», «matado a hachazos», «profanado tumbas», «crucifijos mutilados», «jugado al fútbol con el cráneo», «odio del infierno encarnado en nuestros infelices comunistas», etc. Hay anécdotas descritas que valen por mil explicaciones: «tenía jurado renegar de ti —le decía uno de ellos al Señor encerrado en el Sagrario— y encañonando la pistola disparó contra él, diciendo: ríndete a los rojos, ríndete al marxismo».

92 A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., pp. 20-21.

93 Aguirre, «el vasco rojiblanco, el de las iluminaciones místicas» —según Castro Albarrán—, tipificó el Movimiento Nacional como una clásica reacción de la oligarquía contra los afanes de justicia de la República. En ese sentido era una reacción fascista (cfr. *El Socialista*, Madrid, 9 de octubre de 1936).

Castro Albarrán rechaza el término «fascista» como insultante, aludiendo para ello a las palabras pronunciadas por Calvo Sotelo en el Debate de Orden Público de abril: «lanzó sobre el rebaño marxista, que rugió de impotencia, este noble y valentísimo reto: si a ese tipo de Estado se le llama fascista, yo me declaro fascista» (A. de Castro Albarrán, *ibid.*, p. 22).

cristiano de lo español versus el materialismo marxista, de la España frente a la anti-España, de Dios frente a una utopía de mundo sin Dios:

«Aquí en España, en este trágico juego de la guerra, no jugamos simplemente a democracia o fascismos, a capitalismo o proletariados. Jugamos a muchas cosas. Pero jugamos especialmente, con un juego definitivo, a religión o a irreligión, a Dios o a sin Dios»⁹⁴

Esta trascendencia sobrehumana de la Guerra Civil en curso, decíamos que marca los *objetivos de guerra* de nuestros autores. Y efectivamente, aún partiendo de una justificación del levantamiento como algo puramente defensivo, la guerra que fue su continuación ya no tendría por finalidad la vuelta al punto de partida de la ilegalidad y tiranía de la República, fuera el que fuere el momento en que se fijase. Aunque en realidad, las divergencias en el establecimiento de un punto originario de ilegitimidad republicana, son clara expresión de la falta de importancia de la cuestión y de la prudencia ante un mando militar que no se definía muy explícitamente durante la guerra sobre la forma concreta que se daría a la estructuración del Estado, una vez desechada como inviable la República democrático-parlamentaria.

Quizá el más ardiente defensor del marchamo santo de la guerra, a partir de la consideración de su causa final, sea Menéndez Reigada. Para él, desde luego, como para Castro Albarrán, en una Guerra de tal especie, resulta empobrecedora la fijación de una mera teleología política o social.

En respuesta a un artículo de Jacques Maritain⁹⁵, nuestro dominico, que firma el suyo en *La Ciencia Tomista* como profesor de Teología Moral y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, fundamenta escolásticamente su tesis con método, estilo y tono que pretende empalmar con los modos del famoso Rancio⁹⁶. Habría una categoría de evolución histórica, la *civilización*

94 A. de Castro Albarrán, *ibid.*, p. 26.

95 La tesis de Maritain en su artículo 'De la Guerre Sainte', en la *Nouvelle Revue Française*, es que la guerra («codicia de carne y sangre») no puede tener un papel instrumental de lo religioso sino en las *civilizaciones sacrales*, únicas que se articulan en torno a principios religiosos. En el siglo xx, sólo hay *civilizaciones profanas*, por lo que fenómenos como el de la guerra, son del César. Por lo que a la Guerra Española se refiere, Maritain considera que en el bando nacionalista se ha dado un verdadero «terror blanco» contra el Pueblo de Cristo, simétrico a la violencia republicana contra los sacerdotes de Cristo. Así mismo, Maritain resalta los *peligros de islamización* de los conflictos europeos, cuando se recargan de dimensión sacral diferendos puramente terrestres.

96 El timbre lexicológico empleado para referirse a los *dislates* de Maritain, es del siguiente registro: «artículo que parece haber sido escrito en un ataque de sonambulismo», «criminal calumnia», «intención torcida y malévola», «su filosofía es enmarañar», «escuchemos la gran revelación», «no se le habría ocurrido al que asó la manteca», «parece que Maritain quiere enseñar filosofía», «principios básicos de filosofía que Maritain ignora», «desconoce las normas más tradicionales de la Dialéctica», etc.

tradicional y cristiana, plenamente coincidente con la cultura española, que sería la representada en el bando franquista.

Este tema de la identidad entre Movimiento Nacional y catolicidad de España, lo desarrolla también Castro Albarrán, aceptando sin discusión crítica los puntos de vista de Pemán y Maeztu expuestos en *Acción Española*, donde se rechazaban como vanas las pretensiones de Galdós, Castelar, Costa u otros heterodoxos, en orden a fundamentar un patriotismo sobre otras bases que las de la identidad España/Catolicidad:

«El patriotismo de nuestros heterodoxos, aunque sólo sea hereje a medias, es siempre un amor desgraciado y patético. Necesitan dividir a España de su historia, que es su ser, para poder quererla. Su pasión es como la de esos amantes infortunados que no sueñan sino en una barca que les aleje del mundo enemigo, para vivir ellos solos, los ojos en los ojos, absortos en sí mismos: El amor ético, el patriotismo sano, el que quiere a la patria en el espacio y en el tiempo, sólo pueden sentirlo los españoles que se saben unidos a la España histórica, con su defensa de la Cristiandad frente al Islam, y de la unidad de la Cristiandad frente a las sectas»⁹⁷.

Castro Albarrán y Menéndez Reigada utilizan en sus textos todo un brillante repertorio de exaltación mítica, que incluye desde la Reconquista a la Guerra de la Independencia de 1808, pasando por las glorias imperiales del Siglo de Oro. Menéndez Pelayo, Vázquez de Mella y la revista *Acción Española*, suministran el aparato de erudición al respecto, rechazándose como *pusilánime afrancesamiento* cualquier otra posible lectura interpretativa de la Historia de España y sus creaciones culturales. La España auténtica, es decir, la única que merece el nombre de tal, es aquella que conserva la impregnación del verdadero sentir evangélico; es la España que ha sabido luchar y morir por sus ideales religiosos.

En tonos arengarios, el P. Guillermo Fraile da también por buena la visión de Giménez Caballero sobre los sucesivos noventa y ochos de la Historia de España⁹⁸, que culminaron el 16 de febrero de 1936 y a los que el 18 de julio puso fin. En un estilo retórico muy propio de un momento *azul*, el P. Fraile llega a conceder grados militares a sus mentores ideológicos, como Menéndez Pelayo, a quien otorga el empleo de Almirante de rutas imperiales, o Maeztu, a quien declara Capitán de las naves de la nueva Hispanidad⁹⁹.

97 A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., p. 141.

98 Cfr. E. Giménez Caballero, 'Genio de España', *La Gaceta Literaria*, Madrid 1932.

99 Cfr. G. Fraile, '¡La Guerra ha terminado!', en *Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos españoles*, año 30, nn. 176-177, tomo 58, fasc. 1-2, Salamanca, 1939, pp. 5-6.

Desde un punto de vista abstracto, y por eso mismo muy universal, Menéndez Reigada acude a la ontología para probar la santidad de la Guerra: la *causa final* de la guerra, que es un elemento extrínseco a la actividad bélica en sí misma (de suyo mala, aunque eventualmente pueda ser justa o lícita), se halla en su triple finalidad patriótica, histórica y religiosa que la *especifica* y califica. Y con arreglo al principio «res denominantur a potiori», y teniendo en cuenta la primacía del fin religioso sobre los otros dos, y dado que Historia y Patria españolas se identifican con Religión, resulta, pues, que el fin religioso de la contienda jerarquiza e integra a los demás, pudiéndose, teniéndose que concluir, que la Guerra deviene santa por su causa final, que es la defensa de lo religioso.

En apoyo de tal aseveración estarían las manifestaciones al respecto de:

a) Los *generales* «heroicos» y «religiosísimos» que se alzaron el 17 de julio (Franco, Mola, Queipo) como libertadores de la Patria y, al mismo tiempo y por eso mismo, de la Religión de España¹⁰⁰. De entre ellos se destaca especialísimamente a Franco quien, sin embargo, en ocasiones incluso tan solemnes como sus dos primeros discursos de aniversario de la sublevación, apenas hizo vagas referencias genéricas a ese presunto sello sagrado de la Guerra, salvo las obligadas referencias puramente retóricas de Reconquista o Cruzada.

b) El *Pueblo*, cuya voz no es otra que la del Cardenal Gomá en la Pastoral sobre «El Caso de España». Castro Albarrán parafrasea así las palabras del Primado:

«El pueblo español estuvo siempre sembrado todo de fe. Por espacio de cinco años el rebaño marxista entróse por el huerto sagrado del alma española y pisoteó la semilla bendita. Y hozaba, hozaba la piara en cada surco del huerto por ver de levantar las raíces sagradas. Y el pueblo español aguantaba; pero el 17 de julio este Pueblo, ultrajado, se constituyó a sí mismo y se juró *Guarda jurado* de su propia heredad. Descolgó la carabina vieja, la escopeta enmohecida, que se aburría, colgada sobre el escaño, en la cocina... y ¡ésta fue la guerra!... ¡Guerra de fe y de religión!»¹⁰¹.

100 Sintomáticamente, nunca aparece en los elencos de militares de prestigio y valores hispánicos que hacen los legitimadores salmantinos, el General Cabanellas. Por otra parte, en las proclamas y mensajes de los primeros días de la Guerra, el elemento religioso apenas si aparece, ciñéndose los militares sublevados, lo mismo que las Instrucciones del Director, a cuestiones más seculares.

101 A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa...*, op. cit., pp. 27-28.

Este irracionalismo en que puras afirmaciones se constituyen al tiempo en premisas y conclusión de un inexistente raciocinio, es forma normal en la elaboración del discurso ideológico que motiva estas páginas. Su vitalismo, muy propio de la época, recuerda no poco el de los fascinantes personajes carlistas entrevistados por Fraser, como Antonio

c) Las *Milicias*, proclamadas simplemente en el caso de FE de las JONS como «falange de Cruzados» y, en el caso de requetés, como «espartanos de Cristo», con frase de Eugenio Montes.

La santidad de la guerra en curso se probaría (*contrariorum eadem est ratio*) por la importancia definitoria que la persecución de la Religión, sus miembros, fieles y bienes tenían en la zona republicana. De nuevo el discurso de Reigada alcanza cimas de fuerte exaltación verbal: «violación de sepulcros», «templos arrasados», «sacrilegios inmundos y diabólicos», «profanaciones»... Tal persecución haría elevar el número de mártires a 16.000 hombres y mujeres de Iglesia y a varios cientos de miles el de simples católicos¹⁰². Toda la obra persecutoria, con su afán laicizador y ateo, habría sido la ejecución por la República en guerra («los del Frente Popular», «los marxistas y sus aliados del Frente Popular», «los corifeos de la revolución marxista») de las ideas de Marx, Lenin, Liebnicht —sic— o el Programa de la IC de 1 de septiembre de 1928, explicitador y actualizador del fin primario antirreligioso de la revolución comunista.

Estamos, pues, metidos ya de lleno en la tipificación de la Guerra Civil de 1936-39 como Cruzada¹⁰³. Para Castro Albarrán¹⁰⁴, se trata con toda propiedad de una Cruzada religiosa, y al mismo tiempo civil y política, que se inserta en la historia mítica de la propensión justiciera de la idiosincrasia española, con su Cid, sus Payeses de Remensa, Juan de Padilla, Fuenteovejuna, La Santa Hermandad y la Guerra de Independencia contra los neomuladés y neomudéjares del afrancesamiento.

Según el P. Luis Getino,

«fuimos a la guerra, continuando la hispánica tradición, como a una Cruzada, ansiosos de rescatar valores sobrenaturales. Poco más o menos, como fueron a la Tierra Santa Godofredo de Bullón y sus mesnadas, San Luis y sus huestes, o si queréis mejor, por tratarse de una guerra civil y religiosa, como fue el Conde Simón de Monfort a la guerra de los Albigenses. Y como fuimos nosotros a las Navas, al Salado, a Lepanto, a las Alpujarras»¹⁰⁵.

Izu o Mario Ozcoidi. Cfr. R. Fraser, *Recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Historia Oral de la Guerra Civil Española*. Crítica. Grupo Ed. Grijalbo, Barcelona 1979, tomo I, pp. 60-61 y 165-169.

102 Con mayor prudencia que Menéndez Reigada, Castro Albarrán fija el número de miembros del Clero y Ordenes asesinados en 4.000, cifra próxima a la realidad. Respecto a los cientos de miles de seglares martirizados (la Pastoral Colectiva hablaría de 30.000), Antonio Fernández lo considera una exageración. Cfr. A. Fernández, 'La Iglesia española y la Guerra Civil', en *Studia Historica*, vol. III, n. 4, Edcs. Universidad de Salaman, 1985, p. 41.

103 Para la Historia de la parición y uso del vocablo «Cruzada», vid. V. Palácio, *Cinco Historias de la República y la Guerra*, Editora Nacional, Madrid 1973.

104 A. de Castro Albarrán, *El Derecho al Alzamiento*, op. cit., pp. 377 y ss.

105 L. Getino, *El Derecho de gentes...*, op. cit., p. 499.

El Cardenal Gomá estaría seguro de percibir la mano de Dios, tanto en el desarrollo de la campaña en los frentes como en el difícil gobierno de la retaguardia, de lo que deducía la necesidad de una confianza sin límites en el talento y buena voluntad de quienes llevaban el peso enorme del poder¹⁰⁶. Castro Albarrán y Menéndez Reigada se harían eco de este *ocasionalismo*, al considerar la Guerra Civil como la manifestación de una elección divina para que los hombres de buena voluntad vieran nítidamente el papel que el Cristianismo puede jugar, en orden a levantar pueblos en pleno estado de decadencia y postración. La Guerra Civil sería una gigantesca lección de Filosofía de la Historia, con la que quizá se cerraría para siempre el siglo largo de descreimiento abierto con la Revolución Francesa.

Desde este punto de vista, la Guerra Civil debía ser abordada para su estudio por la Teología, más que por otras disciplinas humanas¹⁰⁷.

2.3. *Funcionalidad de la idea de Cruzada*

La concepción de Cruzada, asentada sobre la idea de una revolución comunista planificada por oscuras fuerzas y destinada a borrar el Cristianismo de España y, con ello, a disolver la nación y su cultura, determina como correlato necesario la afirmación de un dualismo irreconciliable entre la tendencia espiritual representada por un bando (orden, paz social, patria, civilización tradicional) y la tendencia materialista/marxista de la civilización de los soviets rusos, sostenida por los sin Dios, los marxistas o los masones. Resultan incompatible metafísicamente, pues, lo blanco y lo negro, la verdad y el error, el bien y el mal, Crito y Belial¹⁰⁸.

Tal dicotomía, señalada ya por la Instrucción Pastoral de agosto de 1936 de Olaechea y Múgica y, a través de ella, por el propio Primado, Monseñor Gomá¹⁰⁹, sería recogida por la publicística nacionalista con calor y terminaría por dar nueva forma al viejo mito de las dos Españas, el cual acabaría proyectándose sobre la etapa anterior a la propia guerra, determinando con ello una visión irreal y ahistórica de todo el período republicano, en la que dos bandos antagónicos, al acentuar sus contradicciones, habrían resuelto dirimir las mediante el único posible recurso de la fuerza. Con ello, toda la enorme complejidad de los cinco años de República, con la fracturación de fuerzas sociales y políticas en múltiples segmentos, que dificultó y aún bloqueó la solución de los conflictos, queda olvidada y se esfuma bajo la carga del mito.

106 Cfr. Card. I. Gomá, *Prólogo a Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., p. 10.

107 Cfr. A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., p. 15.

108 Cfr. I. Menéndez Reigada, *Acerca de la Guerra Santa...*, op. cit., pp. 365 y 372.

109 Cfr. L. Rodríguez Aísa, *El Cardenal Gomá y la Guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado. 1936-1939*. CSIC, Madrid 1981. Apéndice Documental, pp. 371-378.

Y como consecuencia, surge la explicación ideológica del fracaso de la República por sí misma, de la inviabilidad de un sistema como el democrático para un pueblo con mentalidad y tradición sempiterna de Cruzada, como es el español.

Sin duda, el más vehemente defensor salmantino de la visión de las dos Españas, fue el P. Guillermo Fraile, para quien la lucha de ambas (la auténtica y tradicional contra la bastarda y espúrea), era nada menos que *ancestral*. Y de la misma forma que la Guerra era indiscutiblemente justa, la victoria era indefectible desde el comienzo de la contienda, por necesaria, ya que Dios hizo suya la gran causa de los héroes y mártires «que hacen guardia bajo el azul y las estrellas»¹¹⁰.

Pero la reelaboración del mito de las dos Españas no era una construcción ideológica inocua, sino que servía funcionalmente a diversos objetivos:

a) En primer lugar, permitía conjurar el *miedo* que producía una observación más realista de aquellos tres terribles años y favorecía una perspectiva acrítica de los acontecimientos. La forma concreta en que la guerra se desarrollaba o se había desarrollado, no podía por menos de ser justa y santa, con lo cual resultaba irrelevante todo tipo de evaluaciones descorazonadoras. Cualquier tipo de conducta no ajustada a los principios de humanidad o al respeto al Derecho de Gentes, pura y simplemente no podía existir y, de ser alegado por alguien, no era sino prejuicio o pura mentira. Hay incluso entre nuestros autores quien llega a decir que el verdadero problema de la retaguardia franquista eran las murmuraciones de la gente ante el trato regalado, comida y salarios, dados a los presos republicanos¹¹¹.

Para los legitimadores salmantinos, frente a la destrucción, verdadero objetivo de guerra de los *rojos*, Franco realizaba ya en plena guerra los ideales políticos de la reconstrucción. El «Caudillo electo por Dios», «el forjador de la victoria», habría finalizado con la *escoria* de la influencia extranjera, cerrado dos siglos de decadencia, superado las luchas de clases, partidos y regiones, restaurado la religión —«hasta en los campos de concentración» (sic)— e impuesto felizmente la *libertad del deber* frente a la vacuidad de mítines y elecciones¹¹².

Tales realizaciones mostrarían apodícticamente que los bienes, no sólo materiales sino también espirituales que se habían conseguido al desencadenar la sublevación contra la tiranía republicana, justificaban sobradamente el paso

110 Cfr. G. Fraile, *¡La Guerra ha terminado!*, art. cit., pp. 5-100.

111 L. Getino, *El Derecho de Gentes...*, art. cit., pp. 493 y 499-500.

112 G. Fraile, art. cit., pp. 13-14.

del 17 de julio del 36. En el colmo de las bondades, se habría acabado incluso con la blasfemia.

b) En segundo lugar, permitía rechazar con tranquilidad de espíritu el escándalo que las tesis del Derecho al Alzamiento y la Santidad de la Guerra habían desatado desde muy pronto en sectores europeos como los representados por el *London County Council*, el *British Committee for Civil and Religious Peace in Spain* o el *Comite Français pour la Paix Civile et Religieuse*. También personalidades como el Deán de Cantorbery, D. Sturzo, Maritain o Lady Atholl, insistían en la falsedad de los fundamentos doctrinales propiciadores de visiones incompatiblemente dicotómicas, típicas del bando rebelde, negándose a aceptar incluso la exclusividad de la zona republicana en lo tocante a violencia contra elementos significados como religiosos (ahí estaba la cuestión de los sacerdotes vascos), exigiendo además una rápida solución de compromiso para las hostilidades¹¹³.

En este terreno, la acción propagandística de ciertos clérigos y católicos españoles pro-republicanos de gran significación, fue decisiva, lo mismo que la actividad del Servicio Español de Información¹¹⁴. Pero sin duda fue el EAJ/PNV, desde la Presidencia de Aguirre en el gobierno vasco y con Irujo en la cartera de Justicia del Gobierno Central a partir de la crisis de mayo de 1937, la fuerza que más contribuyó a convencer a amplios segmentos de la opinión mundial de que no era la cuestión religiosa el centro de lo que se dilucidaba en la guerra, como su misma presencia en la zona leal probaba, y como mostraban también sus esfuerzos políticos para conservar o restaurar la presencia del culto y de la Iglesia en la vida social de la zona republicana¹¹⁵.

La preocupación por el ambiente internacional creado por los católicos republicanos y el EAJ/PNV, era evidente en la cúpula residente en el Palacio Episcopal de Salamanca. Para Franco, la posibilidad de victoria pasaba por la continuidad y regularidad del apoyo germano-italiano, y éste estaba condicionado por la actitud de Francia e Inglaterra, cuyos gobiernos no eran inde-

113 Cfr. L. Sturzo, 'Politics first or morality first? Reflections on the Spanish Struggle', en *L'Aube*, de 6 y 7 de septiembre de 1936.

114 Cfr. Servicio Español de Información, *El catolicismo en la España leal y en la zona facciosa*, Madrid-Valencia 1937.

115 Cfr. A. de Lizarra, *Los vascos y la República Española*, Buenos Aires 1944, p. 181.

Frente a las decisiones de Irujo de proceder a la excarcelación de sacerdotes y religiosos detenidos sin formación de causa, así como de restablecer paulatinamente el culto católico, *Solidaridad Obrera* tronaba, amenazando dificultar en todo lo posible tal política (lo cual ya no era tan peligroso después de los sucesos de mayo), empecinándose en considerar a la Iglesia como parte de la conspiración que fraguó el 17-19 de julio (como el Gobierno había reconocido en aquel momento), e instando en términos rudos a la continuación de la persecución antirreligiosa. Cfr. *Solidaridad Obrera*, 25 de mayo de 1937, p. 1.

pendientes de las corrientes de opinión. Y lo mismo, pero en sentido contrario, ocurría a la República, convencida de que su causa únicamente podría triunfar con el apoyo franco-inglés, que sólo se lograría convenciendo a ambos gobiernos de que la República era la legalidad, el orden y la civilidad, acosadas por una invasión exterior venida en apoyo de una subversión interna. Por eso era tan importante el esfuerzo propagandístico. Y a una señal de la mano de Franco, se puso en marcha el mecanismo de la Pastoral Colectiva.

En un libro prologado por una Carta del Secretario de Estado del Vaticano Monseñor Pacelli, futuro Pío XII, al Cardenal Gomá, con la que indirectamente se avalan las opiniones vertidas en la obra, se nos describe a Franco y Gomá un día de mayo de 1937 hablando con dolor de cristianos «sobre la falsa idea que muchos católicos fuera de España tenían del Movimiento», ya que eso podía crear daños irreparables a la causa:

«Pues rondando la conversación sobre este mal y su remedio, saltó la idea de apelar a la conciencia católica del mundo.

—Cabalmente —replicó el señor Cardenal— para deshacer estos errores y disipar dudas, en la exposición de los hechos serena y razonada, hemos pensado los obispos en dirigir a los extranjeros una Carta Colectiva»¹¹⁶.

La propaganda hacia el exterior, pues, como elemento condicionante de la suerte de la Guerra y con un muy fuerte componente alusivo a la cuestión religiosa, fue utilizada intensamente por ambos bandos.

Para Castro Albarrán¹¹⁷, la acción republicana en este campo era simplemente un conjunto de *calumnias* (cuando se refería a casos como el de los fusilamientos o prisión de curas o católicos nacionalistas), o simplemente *mentiras*. Sin querer reconocer hasta qué punto libros como *El Derecho a la Rebelión* habían condicionado una actitud militante de la Iglesia contra la República, que llevó a las fuerzas del Frente Popular al convencimiento de que el Clero era parte de la conspiración, el magistral de Salamanca sencillamente parte del axioma de que la *violencia* y la *mentira* son las dos armas de todo revolución, lo mismo la liberal que la socialista; la violencia opera contra los cuerpos, la mentira contra los espíritus. Y de la misma forma que la vieja Hispanidad tuvo la Leyenda Negra como inseparable compañera, la nueva Hispanidad surgida de la Cruzada, tendría junto a sí esta nueva leyenda de calumnias. Voltaire, Lenin y Netchaiev serían el trío de padres fundadores de la teoría de la mentira como medio, para el fin de la revolución.

116 Centro de Información Católica Internacional, *El mundo católico y la Carta Colectiva del Episcopado Español*, Edics. Razón y Fe, Burgos, 1938, pp. 9-10.

117 Cfr. A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., pp. 43-50.

Esas mentiras sobre la presunta *tiranía del régimen* franquista en formación, la *sanguinaria ferocidad* del Ejército y la *opresión brutal* contra vascos y catalanes, sorprenderían la buena fe de los católicos extranjeros, fácilmente impresionables, que víctimas de la propaganda roja (financiada con el oro salida hacia Rusia y servida por la *escoria* de España¹¹⁸ y de la propia Iglesia), podrían dejarse captar por esas imputaciones de que la causa nacional no era acorde con los principios de la civilización y el progreso.

c) Finalmente, la funcionalidad del empleo político de la noción de Cruzada, permitía justificar el rechazo de todas las propuestas mediadoras y mantener la más plena cohesión en las filas franquistas, incluso en momentos que, como en 1938, hubo amagos de enfriar el conflicto español ante la creciente tensión europea.

Si la finalidad de la Guerra era derrotar a la Revolución comunista, la negociación de cualquier tipo de compromiso no podía ser sino una maniobra de las fuerzas, en concreto de la masonería, que, controlando los gobiernos fautores de la No-Intervención, estarían intentando alcanzar la derrota nacionalista por medios diferentes a los de las armas, que les eran propicios¹¹⁹.

«¿Quae convectio lucis adtenebras?», se pregunta bíblicamente Menéndez Reigada, retomando temas de la Instrucción Pastoral de Olaechea y Múgica. Para el dominico, dada la imposibilidad de toda conciliación entre los hijos de la paz y los del odio, el rechazo a toda mediación debía ser terminante: no a la desnaturalización de la posible victoria y no a la falsificación del carácter de la guerra¹²⁰.

Esta inflexibilidad se situaba en la línea de conducta establecida por el Director y los jefes de la sublevación desde los primeros momentos del Alzamiento. Franco la ratificaría reiteradamente durante la Guerra y acabaría por convertirla en algo inmodificable después de la Batalla del Ebro y la reunión de Munich. Incluso llegaría a darle un contenido político muy claro en febrero de 1939, con la Ley de Responsabilidades Políticas, encaminada a la continuación de la Guerra una vez callados los frentes.

Es quizá en este terreno donde la autonomía de pensamiento de nuestros autores ante las decisiones del poder, queda más marcadamente en evidencia. En pleno 1938, aún el P. Getino afirma con plena seguridad que la España Nacional está dispuesta a negociar, sobre la base de la incondicional

118 Púdicamente Castro Albarrán silencia los nombres de los clérigos/escoria. Entre los laicos cita explícitamente a Ossorio y Gallardo.

Menéndez Reigada cita entre los sacerdotes al *apóstata* y *desventurado* Morales.

119 Cfr. I. Menéndez Reigada, 'Por qué rechazamos la mediación', en *Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos españoles*, nn. 173-174, Salamanca, 1938, p. 436.

120 I. Menéndez Reigada, *Acerca de la Guerra Santa*, op. cit., p. 71.

rendición republicana, todo, excepto el abandono de los ideales ¹²¹. Sorprende tal actitud en un hombre que se define a sí mismo como «religioso que escribe en los periódicos y habla desde la radio», y cuya libertad de movimientos le ha permitido conocer de cerca la realidad de los frentes y de la retaguardia.

Para Menéndez Reigada —situándose en el plano de la Teología (sic) ¹²²— todo intento de mediación era inaceptable, porque suponía reconocer un poder de hecho con el que discutir sobre un depósito de bienes innegociables, sin existir además necesidad militar que así lo impusiese: por otra parte, el mismo hecho de aceptación del principio de un compromiso, sería reconocer la legitimidad para negociar por parte de un poder cuya tiranía había provocado la sublevación y que, al ser aceptado como interlocutor, demostraría la ilegitimidad del Alzamiento. No sólo la aceptación del principio de conversaciones para la búsqueda de una paz negociada lo consideraba Menéndez Reigada como *delito de Alta Traición*, al ser la República en sí misma la negación de las esencias nacionales, sino que además se adelantaba a la Ley de Responsabilidades Políticas solicitando el castigo de la «horda de criminales» del gobierno rojo y de todos los dirigentes, que él justificaba sobre la base de que la renuncia al castigo de los criminales, supondría la negación del Estado en cuanto tal, ya que una de sus funciones esenciales es la de la administración de la justicia penal ¹²³.

La negativa a un posible acuerdo aparece también como rechazo a una presunta sutil maniobra de los Estados tradicionalmente enemigos de España, como Francia, que buscarían con el compromiso entre los beligerantes la persistencia en nuestro suelo de unos principios como los encarnados por la República, causantes de más de un siglo de decadencia. Desde esta perspectiva, Maritain o Bernanos, por ejemplo, entre otros, más que portavoces de la paz, serían la expresión del miedo francés al engrandecimiento de una vecino que, de seguir el nuevo camino abierto por el Movimiento Nacional, podía llegar a superar su larga postración y recuperar incluso viejas glorias aparentemente perdidas, abandonando su larga y ya casi tradicional supeditación a lo francés.

Ciertamente Menéndez Reigada no comprendía los temores de un Maritain al afianzamiento de Franco, al no considerar más que como mera añagaza argumental del filósofo francés, la insistencia de éste en la posibilidad de un conflicto europeo desencadenable por Alemania tras haber comprobado la falta de resistencia de los Estados democráticos en España y contar además

121 Cfr. L. Getino, art. cit., p. 506.

122 «Desde el punto de vista de la Teología Católica, el Gobierno del Generalísimo Franco no puede lícitamente pactar con el llamado Gobierno de Barcelona, o de Valencia, para establecer la paz» (I. Menéndez Reigada, *Por qué rechazamos...*, art. cit., página 436).

123 I. Menéndez Reigada, *ibid.*, pp. 437-8.

ahora con un nuevo aliado a espaldas de Francia¹²⁴. Y era en parte lógico que no comprendiera estos temores, pues el dominico no concedía virtualidad misionera o expansiva de ningún tipo a los postulados políticos defendidos por los franquistas.

«Teme —decía Menéndez Reigada refiriéndose a Maritain— que España tome represalias y trate de vengar todas las injurias que de Francia he recibido. Mas yo le digo que no tiene que temer por esta parte, porque el espíritu cristiano que España trata de instaurar no es negativo. España pondrá una *valla en los Pirineos* para no dejar pasar el torrente de inmoralidad, de incredulidad, de corrupción, que desde la invasión napoleónica venía inundando nuestro solar patrio»¹²⁵.

El rumbo internacional ostensiblemente «neoaislacionista» a ultranza que se marcaba para la nueva España en el contexto europeo, era acusadamente modesto, quizá como consecuencia de la inconfesa constatación de la abrumadora presencia germano-italiana. Y es este sello defensivo y puramente restaurador de supuestas esencias autóctonas, el que inspira a nuestros autores, muy ajenos a la fraseología imperialista de otros sectores del Movimiento.

Castro Albarrán señalaría la posibilidad de construir un imperio reducido tan sólo al interior mismo de España, una nueva Hispanidad cuya materia prima a integrar serían los obreros, de la misma forma que en la vieja lo habían sido los indios:

«Hay, en el mundo de hoy también nuevas Indias, codicia de explotadores, feria de traficantes y mercaderes. En estas nuevas Indias hay también unos pobres indios... los pobres trabajadores, tan explotados, tan esquilados. Pero España... los reunirá y, con ellos redimidos, formará su nuevo Imperio»¹²⁶.

3. BREVE REFERENCIA AL NUEVO SISTEMA DE PODER

Justificada la rebelión contra la República y determinado el carácter de Cruzada de la Guerra, nuestros escritores se muestran muy parcos a la hora de ofertar soluciones para la articulación práctica de un nuevo sistema de poder, reduciendo su papel a un mero enjuiciamiento positivo/silente de lo que lentamente se iba configurando. Es prácticamente tan sólo Castro Al-

124 Para el Centro de Información Católica Internacional, Francia era el «campo más árido» para la Causa Nacional, debido al Frente Popular: «el oro español se ha vertido sin tasa por las redacciones: el fantasma de Hitler y Mussolini (del enemigo cierto y del amigo voluble, según ellos) se asocia en la fantasía de muchos franceses con otro fantasma que ven asomarse por el Pirineo: tres fascismos contra una República». Cfr. *El Mundo católico y la Carta Colectiva del Episcopado Español*, op. cit., p. 21.

125 I. Menéndez Reigada, *Por qué rechazamos...*, art. cit., pp. 371-372.

126 A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit., p. 205.

barrán quien dedica parte de uno de sus libros a esta cuestión¹²⁷, aunque moviéndose puramente en el terreno de los principios.

Se ciñe el magistral de Salamanca al estudio de lo que considera el primer paso en la definición organizativa del nuevo Estado, a saber, el Decreto de 1 de abril de 1937, por el que se establecía la unidad entre los grupos políticos y Milicias que constituían el soporte del poder militar y a cuya cabeza, como Caudillo, se hallaba Franco:

1. La resultante del Decreto era un Movimiento cuyo rasgo definitorio y preeminente era el de *Nacional*. Tal calificación sería la única apropiada, teniendo en cuenta los pronunciamientos al respecto de los más destacados cabezas dirigentes, como Mola y Franco. Pero no sólo las declaraciones, sino las medidas aparecidas en el *Boletín Oficial*, en temas tan significativos como la nueva regulación de la enseñanza, de inspiración netamente católica, así lo probaban.

Tal nacionalismo tenía —siempre según Castro Albarrán— una vena patriótica como la de 1808, de reacción a una impuesta extranjerización y era contrario tanto al marxismo como al culto divinizador del Estado, de raíz fichteano. Ni Franco, ni Mola, ni las Milicias, ni el Pueblo, ni la doctrina del Partido, se orientaban por caminos de panteísmo estatal, es decir, de imitación del modelo nazi alemán, visto ya con franco recelo por Pío XI¹²⁸.

Sin más precisiones argumentales que las de encendida retórica al uso, Albarrán aborda el «asunto espinoso y difícil» de los también nacionalismos vasco y catalán, formas de *nacionalismo regional* según Vázquez de Mella, opuestas a un sano *regionalismo nacional*, capaz de reconocer las diversas personalidades históricas dentro de la única verdadera nación; 1492 y la figura de los Reyes Católicos serían el hito irrenunciable:

«vamos haciendo palmo sobre palmo, la soldadura de toda España, al fuego de la guerra, al yunque de nuestros cañones. Es mucho lo que nos cuesta esta nueva reintegración de España, para que no sea definitiva, para permitir amablemente, que nadie vuelva a desgarrarnos la Patria con los puñalitos de oro de sus ilusiones nacionalistas. Somos, pues, y seremos siempre antiseparatistas»¹²⁹.

La forma de integración de los individuos en el cuerpo de la nación, no es ya la manera esterilizadora y fracasada de las democracias, sino la de un Estado jerárquico, de modos eficaces y rápidos, ajustados a la situación

127 Cfr. A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa. El sentido...*, op. cit.

128 «*Mit Brennender Sorge*» recogía el temor del Pontificado a un unitarismo agudo que no reconocía en la práctica ningún papel a la Iglesia en el ámbito de la vida social.

129 A. de Castro Albarrán, *ibid.*, p. 157.

histórica. Si en *Derecho al Alzamiento* y citando a Vázquez de Mella y sus críticas a las farsas electorales del sistema de la Restauración, se negaba toda seriedad a un régimen parlamentario, ahora se procede a un rechazo completo del «señuelo de la democracia política», nuevo opio de las masas en cuyo suministro se funden socialismo y judaísmo:

«El pueblo votaba en las urnas. Pero sobre sus espaldas se alzaban las grandes oligarquías financieras, la banca internacional judía, las sociedades anónimas... la democracia pareció adquirir un nuevo refuerzo: las fuerzas *judío-masónicas* dieron la mano a las masas proletarias. Pero la mano judía y masónica tampoco tenía nada real para el pueblo: en lo político, derechos; en lo económico y social, aspiraciones..., y la eterna esclavitud a la tiranía del dinero. De esta manera es verdad la frase de Spengler, la democracia se ha identificado con el predominio del dinero»¹³⁰.

Resuenan aquí ecos entre otros del discurso de Franco en el primer aniversario de la sublevación, en el que se calificaba la democracia de «*verbalista y formal*» y a los partidos y elecciones, de «*ficciones*», frente a todo lo cual el Movimiento ofrecía una «*democracia efectiva*», basada en una «*justicia integral*» y en la «*libertad moral*», lograda en el servicio a un credo patriótico, así como en el respeto a la «*libertad económica*»¹³¹.

El nacionalismo reivindicado, pues, por el Movimiento, es un nacionalismo que se define como antiseparatista y antidemocrático. La pregunta de Castro Albarrán es si ese nacionalismo podría ser contrario a la doctrina de la Iglesia, muy recelosa ya ante el nacionalsocialismo y otras formas de fascismo que relegaban a la Iglesia prácticamente a su función cultural. Eludiendo plantear el problema y hablando del nacionalismo en general, se responde que si bien la Iglesia es por esencia católica, todo un elenco de autoridades, que va de San Isidoro a Santo Tomás y, pasando por Cánovas, llega a Pío XI y Maurras, habría enseñado que el amor a la nación o nacionalismo, no es incompatible con ningún principio cristiano tal como —curioso anacronismo— habría afirmado el mismísimo San Agustín, «el primer doctor del nacionalismo», el «primer nacionalista».

2. El segundo elemento definitorio de la reconquista llevada a cabo en la guerra es el social u *obrerista*. Aunque obrerismo del bueno, es decir, diverso completamente al ofertado en un contexto democrático.

Este obrerismo nuevo se configuraría no como la acción de los trabajadores a través de sus propias organizaciones, sino como la atención paternal

130 Ibid., p. 200.

131 Cfr. ABC de Sevilla, 19 de julio de 1937, p. 2.

desde el poder en favor de los *humildes*, los *parados*, los *tuberculosos*, los *mutilados*, los *pobres*. La *misericordia* de Falange, la *bondad de corazón* de Queipo de Llano o el calor de los Decretos del Boletín Oficial de Burgos, serían los mejores botones de muestra de lo que iba a ser ese obrerismo-desde-el-Estado¹³¹.

Castro Albarrán enumera todos los hitos de la política social del nuevo régimen, que concreta en el mantenimiento de los precios en el nivel de 1936 aproximadamente, en el cumplimiento de las leyes sobre accidentes de trabajo y seguros sociales, en el subsidio a familias de combatientes voluntarios, en el socorro al paro forzoso, en el funcionamiento de la Fiscalía de la Vivienda, en el comienzo de los planes de construcción de casas baratas, en la creación del Patronato antituberculoso, en la supresión para los parados del pago de alquiler, agua y luz, en la creación de los comedores de Auxilio Social, en la institución del Plato Unico y en la conservación, en fin, de los avances sociales consagrados ya en leyes anteriores.

«Si vieran los obreros a nuestro generalísimo, preso de mapas y de planos, absorto en los zig-zag de las banderitas que trepan por la línea de los frentes, acuciado de impacencias de teléfonos, todo en sus manos el motor de la guerra, y toda en sus manos España; si le vieran así... pensarían acaso con tristeza: 'no se acuerda de nosotros...', ¿que no?, ¿que Franco no se acuerda de los obreros? De la abundancia del corazón —es palabra evangélica— habla la boca... Pues la boca del Generalísimo parece que no sabe abrirse para hablar si no habla de los obreros. Señal que les lleva muy metidos en el corazón»¹³².

3. Para concluir estas páginas, tan sólo una referencia obligada a la cuestión de la relación entre la Iglesia y el Estado, tipificada por Albarrán como de *separación política* que intenta rehuir tanto el cesaropapismo como la teocracia; *separación administrativa*, sin interferencias recíprocas ni Patronatos; *separación económica*, con apoyo estatal, en recompensa del latrocinio desamortizador y atención a la labor esencial de la Iglesia en la sociedad; en resumen, separación propia de dos sociedades perfectas, a las que junta en la acción práctica la identidad de fines y cuya colaboración se consagra en forma permanente por el Concordato.

Este debía ser el camino de la lealtad a los orígenes del Movimiento. Las únicas sombras de traición perceptibles por el momento, serían el afán modernizador-nazificador de FEJONS, así como la pretensión de trasnochada tolerancia liberal de algunos monárquicos. Pero la fe predominaba aún sobre todo:

131 Ibid., pp. 202-203.

132 Ibid., p. 201.

«no será así. No habrá traiciones. Y la España que, con la Espada, resucitamos, será una, grande y libre. Precisamente porque será católica»¹³³.

Ciertamente, como ha señalado Antonio Fernández¹³⁴, la Iglesia y el pensamiento católicos, al quedar confrontados en la República con los elementos y coyunturas de transformación que ésta representó e impulsó, sufrieron bruscamente los efectos de unos cambios que en otros países europeos ya se habían producido y que aquí, uniéndose al conjunto de la problemática general de España, hicieron del catolicismo y de la Iglesia, agentes y víctimas del enfrentamiento en que se dirimieron las agudas tensiones acumuladas en la realidad socio-política, a las que no era ajeno el propio papel que la Iglesia debía jugar en la sociedad.

* * *

Hemos pretendido mostrar cuál fue la manera de entender las cosas por parte de clérigos y católicos militantes, en la Salamanca de la Guerra Civil. Con estas páginas —ya demasiado largas— hemos intentado realizar tan sólo una primera aproximación al estudio de las raíces doctrinales del primer franquismo, tal como fueron esbozadas por miembros de Instituciones como la Iglesia y la Universidad salmantinas, que contribuyeron así desde los primeros momentos, a la conformación de un corpus doctrinal de legitimación de la sublevación de julio, la guerra y el sistema de poder que de ella dimanó.

El Magistral de la Catedral, Castro Albarrán, directamente vinculado al Obispo y futuro Primado Pla i Deniel; sus discípulos jesuitas, como el P. Juan de la Cruz Martínez; los dominicos colaboradores de la revista la *Ciencia Tomista*; los miembros de la Asociación Francisco de Vitoria, que agrupaba el militantismo católico local y a la que pertenecían Menéndez Reigada y el Catedrático de Penal Sánchez Tejerina, son quienes nos han proporcionado con sus escritos la fuente para nuestro modesto trabajo.

Al final de un año como este de 1986, en que copiosamente se ha contribuido al estudio de la Guerra comenzada hace justamente 50 años, los materiales que hemos manejado y fueron parte de la guerra de tinta de aquellos años, nos han mostrado justamente la distancia mental con aquella época por parte de la España de hoy, en que ya se han hecho realidad política los deseos de Azaña, de Paz, Piedad, Perdón.

TOMÁS PÉREZ DELGADO

133 A. de Castro Albarrán, *Guerra Santa...*, op. cit., p. 244.

134 A. Fernández, 'La Iglesia española y la Guerra Civil', *Studia Historica*, vol. III, n. 4, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 1985, pp. 73-74.